

III. CULTURA Y POLÍTICA

Modernidad, identidades políticas y representación: cuatro décadas y un desenlace abierto

ROMEO GROMPONE

*A Julio Cotler por tantos años
de acuerdos y discrepancias
sobre política, literatura y cine.
Por un afecto que va creciendo con el tiempo.*

“El estado de emergencia que vivimos no es la excepción sino la regla” decía Walter Benjamin para dar cuenta de los alcances de cualquier explicación sobre lo que estaba ocurriendo en la dramática historia europea de los años veinte. En el Perú, cuando se trata de pensar en la historia de las cuatro últimas décadas, parece que los límites temporales no sirvieran, que las situaciones extremas e intolerables vinieran desde mucho tiempo atrás y continuarán en los años venideros. No puede anticiparse un punto de inflexión que otorgue un principio de orden a los acontecimientos y que no suene, a la vez, como gesto impostado de arrogancia intelectual. Y, aun así, es necesario tratar de entender lo que está ocurriendo, para no incurrir en el escepticismo como un desvalido recurso.

Este artículo tratará a grandes rasgos sobre la cambiante formación de identidades como elaboración personal y social en la medida en que ellas están influidas por las relaciones con el poder político. De este modo, se tomarán en consideración las dificultades para constituir lazos representativos estables, las instituciones del Estado de Derecho como aspiración normativa y vigencia social, su influencia en la definición de las cambiantes fronteras étnicas y de exclusión, el colapso de las élites y la fragmentación social. Todo aquello que, de una u otra manera, se acostumbra a calificar como las

oportunidades y desvelos de nuestra modernidad política. Si bien este artículo no quiere quedarse en un enclaustramiento disciplinario, otras dimensiones de esta modernidad, especialmente la cultural, no se considerarán sino según su distancia o acercamiento con el plano institucional; de lo contrario, se excederían los propósitos de este trabajo y los conocimientos del autor. Estas situaciones no serán consideradas desde el peso muerto de una condición incambiada —como con frecuencia se acostumbra a hacer— sino tratando de dar cuenta de las transformaciones ocurridas en las últimas cuatro décadas: el cuestionamiento de un orden tradicional, un proceso de transformación radical vertebrado desde el Estado, la violencia política, el intento de construir un régimen democrático estable, la amplia convocatoria social que logra en la sociedad el autoritarismo y el ingreso, luego, a una vacilante afirmación institucional.

EL CAMBIANTE JUEGO DE LAS IDENTIDADES

Al margen de las discusiones filosóficas sobre el tema, en el Perú conviven, se interfieren y se juntan en inesperadas convergencias distintas formas de vivir las identidades sociales y políticas. Sobre estas identidades siguen incidiendo hábitos y fantasías de un orden tradicional. En ellas se hacen sentir, todavía, nociones de jerarquización étnica, una relativa naturalización de las diferencias, aspiraciones a una dominación sin resquicios y la tutela o la piedad por parte de los poderosos; todas estas modalidades confluyen en marcar una insalvable diferencia. Influyen también, aunque cada vez con menos fuerza, ideas corporativas según las cuales cada uno tiene su lugar y solo existen reconocimientos restringidos a aquellos que forman parte del grupo de pertenencia de cada persona.

Otras maneras de pensar o de imaginar las identidades parten de la noción de oportunidades para construir biografías personales relativamente ordenadas, constituidas por acciones que se orientan a tener dominio y eficacia sobre la realidad vinculadas a otras que aspiran a una comunicación más amplia en la que predomine la argumentación y los acuerdos. Desde este punto de partida, surge la precaria convicción de que, en momentos relativamente pautados, las personas deben tomar opciones radicales en relación con el trabajo y la familia, buscar referentes en las instituciones y asumir como esferas que escapan relativamente a su control —pero conocen en su dinámica e influencia— al Estado, al mercado y a la política. Además, los in-

dividuos y grupos buscan empecinadamente vías de acceso a algunas o varias de estas esferas.

Finalmente, puede entenderse que las identidades no pueden vivirse como un sitio coherente, homogéneo, ubicado en algún punto establecido de constitución. Desde este punto de vista, las diferentes posiciones del sujeto están atravesadas por el género, la raza, la clase y la etnia. Lo que va siendo cada uno se va justificando por hegemonías y diferencias. No hay espacio de sutura. Las posiciones se van estableciendo provisoriamente una y otra vez. La exclusión, entonces, no puede ser justificada y tiene que ser armada y rearmada por las élites y por aquellos que permanecen al margen, resisten, cuestionan.

Estas distintas maneras de vivir las identidades se asocian a las diferentes nociones sobre el orden político y social deseado o impuesto.

El rescate de la tradición puede llevar a idealizar el pasado o a pensar en explotaciones y agravios seculares que, en su énfasis, desestiman las perspectivas abiertas al cambio político y cultural. También puede adoptar una dirección emancipadora si se tiene la sensibilidad y la capacidad de entender el alcance de las transgresiones y adaptaciones que las mayorías fueron capaces de realizar para ser protagonistas y no sujetos pasivos una historia escrita por otros. La pretendida afirmación de una identidad moderna conduce con frecuencia a la afirmación de discursos que aspiran a ser únicos y definitivos, a la intolerancia en nombre de una razón excluyente de cualquier otra. Como contrapartida trae consigo también una mayor disposición al pluralismo y la crítica. El clima intelectual de nuestros días valora aquello que desestabiliza las representaciones estatuidas, desconfía sobre las seguridades de los fáciles acercamientos a los otros, enfatiza la indeterminación como espacio de resistencia a la prédica de los autoritarismos, sabe que la política no tiene puntos finales ni órdenes acabados. Sin embargo, uno puede también, en medio del juego de las diferencias, perderse en ellas y desvincularse de cualquier forma de pensar la sociedad en su conjunto. Como señala Eagleton, si todas las particularidades son intraducibles, la diferencia se asemeja a la igualdad y no hay espacio para una emancipación que tiene que ver con un momento de universalidad, de una reflexión sobre lo que está ocurriendo en la sociedad y la política donde haya señales de entendimiento compartidos, lo que no supone homogeneización, imposición de discursos o prácticas uniformizadoras (Eagleton 2000).

Puede identificarse, sin demasiadas dificultades, a quienes sesgan la interpretación, según cada uno de estos diferentes modos de pensar las identidades sociales, cuando tratan de interpretar lo que está ocurriendo en la sociedad peruana. Quizás, más que emprender un tedioso ejercicio nominalista, persiguiendo autores y corrientes, conviene advertir que las migraciones, los avances y desventuras de la educación, el crecimiento de las ciudades, las transformaciones en la sociedad rural, las nuevas formas de exclusión, la construcción de referentes políticos que provocaron adhesiones y también enconados distanciamientos, la violencia y la guerra, y las cambiantes estrategias para acercarse al Estado y al mercado hicieron que, para la mayoría de las personas, las identidades se encontraran en tránsito. Cada criterio clasificatorio quedó en parte vigente y en parte fuera de lugar, mientras que las imágenes recurrentes de estos años fueron el desorden, la anarquía o la creatividad desbordada y, en algunos periodos, la violencia, la intolerancia y el temor.

SALIENDO DE UN ORDEN TRADICIONAL

Los primeros trabajos de los investigadores del Instituto de Estudios Peruanos se ubican en el momento mismo de esta transformación irreversible que culmina en la abigarrada situación presente. Dichos trabajos se emprendieron pensando más en las esperanzas que en los riesgos que surgían de la comprobación de un orden tradicional en desmoronamiento. En todo caso, su reflexión se distanciaba de quienes imaginaban momentos fundacionales del surgimiento de una nación relativamente integrada o, el revés de la trama, del fatalismo político y cultural que podía encontrar buenas razones para justificarse en la conquista y la dominación.

Quizás coincidían en lo que recientemente ha señalado Forment sobre la recurrencia, en el Perú, de justificar lazos sociales y política en ideas corporativas en las que Dios instituía las relaciones entre la comunidad y el soberano. Dicha recurrencia se dio, primero, como argumento explícito y, luego, impregnando una imaginación política que no terminaba de secularizarse (Forment 2003). Quedaba, sin embargo, pendiente como desatar el nudo que se había trenzado; este nudo surgía de la comprobación de que esta comunidad y este soberano no podían ejercer el poder simultáneamente. Los realistas y luego los grupos dominantes entendían que el pueblo transfería en un acto único el poder al monarca, al presidente, al caudillo. Los comunita-

ristas consideraban, en cambio, que solo había una cesión parcial del poder; ello justificaba la rebelión, aunque se invocaban principios de Derecho natural y no reivindicaciones directamente políticas, lo que en parte limitaba su capacidad de intervención como actores sociales con perspectiva de decidir, liberados de límites y condicionamientos impuestos.

En una sociedad de grupos que se pretendían cerrados y jerarquizados quedaba poco espacio para autonomías personales, pluralismo en las asociaciones y constitución de lazos representativos. Esta condición inicial desde la que se pensaba la distancia entre personas de diferente condición explica en parte la larga vigencia del patrimonialismo. Una vez removidos los precarios límites de contención de los excesos de los señores locales que el orden colonial trataba de implantar, los indios estaban adscriptos al universo de relaciones particularizadas de quien ejercía la autoridad —hacendado, juez, prefecto—, aunque no faltaron expresiones de negociación y de resistencia. Lo público, lo que es de todos, cede por lo general al abrumador peso de intermediarios sujetos a negociaciones con poderes locales.

Y, aun en los tiempos presentes, siguen acosando algunos legados de aquella historia —legados de los que la sociedad no consigue desprenderse—. Las normas jurídicas aparecen como expresión descarnada de acuerdos instituidos o informales entre grupos. Esta situación marca, desde los orígenes, los márgenes de aceptación o desacato por quienes no se sienten concernidos por dichas normas. Este fenómeno le resta a nuestra pretendida modernidad parte de sus aspiraciones universalistas. Y, en otro plano, a las mayorías excluidas, entre ellas, los campesinos o los vecinos de asentamientos urbanos pobres, se las entiende atadas a sus pasiones antes que a una prédica orientada en términos de proyectos, recursos y oportunidades. Algunos movimientos sociales, aún en el tiempo presente, no solamente tienen que pugnar para que se reconozcan sus derechos y reivindicaciones sino que, antes de ello, deben acreditar una suerte de mayoría de edad. Lo primero que hace notar la autoridad es la presunta pobreza de sus argumentos y la escasa calificación de quien protesta o demanda.

Es cierto que esta es una aproximación de trazos demasiado gruesos. De Trazegnies parece exagerar cuando señala que, en la mayor parte de la historia republicana, la diferencia entre liberales y conservadores solo tenía sentido en el plano político porque no podía pensarse en una sociedad basada en principios de mercado sin un imaginario igualitario que cuestionara jerarquías rígidamente delimitadas (De Trazegnies 1980). Es cierto que el co-

mercio no introdujo la “dulzura de las costumbres” que entusiasmaba a Montesquieu, pero se fueron extendiendo, por lo menos durante todo el periodo republicano, las ferias campesinas; además, las personas salían de sus espacios rurales y aprendían a conocerse en el acuerdo y en el recelo —competidores, colaboradores, adversarios—, y llegaron, también, a establecer vínculos mercantiles más amplios.

Asimismo, hubo intentos, en diferentes etapas, de construir una comunidad política con manifestaciones y actos públicos en los que concurrían comerciantes, artesanos, médicos, maestros, que reivindicaban, con palabras de su tiempo, su condición de trabajadores y denunciaban la opresión a los indígenas y los poderes arbitrarios de los hacendados, de los jefes militares, de los caudillos y de los curas. Quizás todavía estábamos ante una ciudadanía “regulada” y organizada por el precario orden estatal, pero al menos se trataba del pueblo reunido en un proyecto en el que todos se sentían comprometidos. Ni a la dominación tradicional se le puede despojar de atisbos de modernidad, ni en tiempos que se supone de cambios puede dejar de advertirse el peso de acontecimientos que vienen de tiempo atrás y persisten como referente, como rémora o como utopía.

Lo cierto es que a mediados de la década de 1960, como advertían Alberti y Cotler, se va abriendo el pluralismo en el conjunto de la vida social y le quita espacio a las fáciles síntesis que ordenan el campo de observación entre dominantes y dominados, explotados y explotadores. Y, si bien había campesinos aislados unos de otros y controlados por la autoridad —el modelo del llamado “triángulo sin base”—, los autores advertían que estaba pasando el tiempo de su vigencia. De este modo, se distanciaron de lo que todavía siguen entendiendo los lectores apresurados acerca de esta interpretación —lectores preocupados más por la calidad de la imagen que por el razonamiento seguido— (Cotler 1994).

Tomando de modo riguroso y creativo a Weber, Parsons y Marx, Bourricaud señalaba la decadencia del orden oligárquico en el Perú. Los gamonales y los caciques perdían peso, a menos que “la metáfora del peso no despertara en nosotros la de la carga muerta que la parte activa y viva de la nación debe remolcar” (Bourricaud 1969). Las relaciones familiares entre privilegiados no ordenaban ya el conjunto de la actividad política y económica. Se hacía sentir el surgimiento o reconversión de grupos empresariales, de obreros y campesinos movilizados. Las distintas agencias del Estado, entre convencidas y obligadas, dejaban de lado sus antiguas prácticas particularistas y el

solo recurso a las lealtades personales. Había un nuevo juego en el cálculo de costos y beneficios en la acción social y en relación con las instituciones; este nuevo juego obligaba a un manejo político a la vez más audaz, más preciso y más matizado.

EL ESTADO Y LA SOCIEDAD TRANSFORMÁNDOSE A LA VEZ

Velasco intentó dar un brusco desenlace a este conjunto de problemas abiertos, entendiendo, como lo había creído también Haya de la Torre, que la sociedad peruana solamente podía vertebrarse desde el poder. Se acostumbra a señalar que fue un gobierno con rasgos corporativos que buscaba articular intereses mediante la representación funcional de grupos sociales incrustados en el sistema político. En esta línea, este gobierno expresa una continuidad y una ruptura respecto del modo en que se había pensado la relación entre poder y sociedad en la historia peruana. No remite a un imaginado principio fundacional democrático. Pretende, por el contrario, marcar una ruptura. El Estado que supuestamente organizaba el proceso estaba, a su vez, inmerso en el mismo principio de constitución y cambio que los grupos a quienes quiere convocar. Estado y sociedad se transformaban a la vez, si bien el primero reclamaba su capacidad de conducción.

Ocorre, sin embargo, que, contra ciertos sentidos comunes establecidos, las corporaciones son parte de una construcción política institucional, pero tienen necesidad de enraizamiento social. ¿Como construirlas solamente desde el Estado, persistente ilusión de algunos políticos, la mayoría de los militares y grupos de la comunidad académica? Hegel —a quien se toma como referencia cuando se trata de fundamentar las relaciones entre lazos corporativos, ideas de sociedad civil y dominio estatal— señala que estas mismas corporaciones constituyen una forma de asociarse que educa en un ejercicio político y reflexivo. Así consigue vincular intereses particulares con generales. Además, dicho filósofo señala que, solamente después de que ello acontece, la autoridad recupera su capacidad de intervención para evitar el encierro de aquello que se queda en lo exclusivamente social porque, de lo contrario, “se osificaría, se enclaustraría y naufragaría en un régimen gremial miserable”.¹

1. Esta referencia a la *Filosofía del Derecho* de Hegel ha sido tomada de Serrano (1999: 72).

El gobierno militar, actuando entre la ilusión y la voluntad empecinada, intentó fortalecer o hasta provocar que surgieran actores y organizaciones sociales a marcha forzada. Afrontó los dilemas propios de aquellos que promueven un cambio radical y, a la vez, quieren contener las dinámicas que el mismo proceso desencadena. La movilización trastoca criterios establecidos y da margen para la integración; además, propicia cuestionamientos, improvisaciones, intentos de sacar ventajas de corto plazo y deserciones. Y ello ocurre en el momento en que se quiere establecer un nuevo orden y como parte del mismo proceso.

Estas direcciones contrapuestas de cambio y de control se expresarán, desde los inicios, en conflictos solapados o expresos que irrumpen en un sistema que se pretendía presentar como coherente y cerrado. Se realiza una reforma agraria radical —que reconoce como antecedentes las movilizaciones campesinas y el declive de las haciendas— que desplaza a los antiguos grupos dominantes y genera cambios en diferentes direcciones y algunas contradicciones en lo social y lo político —pero de signo avanzado respecto de la situación anterior—. Se amplía el reconocimiento de los sindicatos, a la vez que se les quiere integrar en la comunidad industrial, modelo improvisado en el que la mayoría de los trabajadores no aspiraba a participar. A los movimientos barriales no se les considera en su capacidad de construir con autonomía sus propios espacios urbanos; en cambio, a estos movimientos se los involucra en propuestas de desarrollo en las que, por lo general, no se sentían concernidos —por lo menos en su calidad de vecinos de un asentamiento—. Como ocurre por lo general con los discursos de justicia social, se entendía que las descripciones estaban sobrando ante la asumida contundencia de los hechos. No se conseguía advertir —probablemente no se podía hacerlo y quizás se está formulando ahora un razonamiento prescriptivo que ignora los dilemas de los protagonistas de esa coyuntura crítica— que, en una sociedad heterogénea, aun en sus grupos postergados, imponer un discurso radical sin matices afecta a actores sociales que ya estaban subordinados en el sistema anterior y no solamente a los antiguos grupos dominantes.

En la dinámica política desatada, el régimen dejaba a los grupos a quienes trataba de incorporar atados al momento excepcional de la transformación política; mientras tanto, se iban improvisando líneas de continuidad, lo que producía inseguridades e inestabilidades personales y sociales. En el derrotero establecido no había márgenes para aceptar principios de re-

presentación alternativos a los que el propio gobierno promovía impulsando un discurso totalizador en una sociedad que no terminaba de articularse. Estaban claros los desplazamientos pero no los puntos de llegada. No se tomaban en cuenta, y acaso no se querían ver, los desfases que cualquier proceso de cambio trae consigo y se tomaba el conflicto como una intromisión indebida, viniera de quien viniera.

LOS INTENTOS DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL

En el plano cultural se partía de una visión que remitía a una inexorable “herencia colonial” que marcaba la explotación de los hacendados o burgueses —blancos, urbanos, criollos— sobre lo popular —campesinos, indígenas—. Esta visión de dos mundos comunicados y enfrentados entre sí permitía al gobierno militar presentarse como aquel que apuraba la historia, cerraba brechas y ponía punto final a siglos de injusticia estableciendo un nuevo modelo de sociedad que le daba protagonismo a los más pobres y postergados. Como suele ocurrir con los cambios que se quieren presentar como revolucionarios, las separaciones eran tajantes y los nudos evidentes, como si ello facilitara la tarea de cortarlos de una buena vez.

En los hechos les negaba en parte su historicidad a los grupos oprimidos salvo en los momentos de su sublevación. Además, se los despojaba de aquello que los acercaba a personas de distinta procedencia. Se ignoraba, también, que los grupos más discriminados habían estado erosionando en parte las jerarquías étnicas o expresaban manifestaciones de resistencia que no se revelaban de inmediato en el plano político. La prédica que los reivindicaba no tomaba en cuenta estos hechos en su afán por señalar que se estaba dando inicio a una nueva etapa histórica. El pasado se acogía solamente desde imágenes de íconos, la consigna o marcando hitos simbólicos.

Esta situación permitía al régimen hacer un discurso de tono pedagógico que le ayudaba a establecer una síntesis definitiva que, en teoría, tomaba lo mejor de aquello que hasta entonces estaba separado. Por un lado, los saberes y costumbres de las sociedades andinas. Por otro, los avances tecnológicos de la modernización, tal como se expresaba en la propuesta de desarrollo del gobierno. Procesos como la integración al mercado de comunidades y centros urbanos de la sierra —que colocaba a vastos contingentes por fuera de la sociedad tradicional—, los conflictos entre los mismos campe-

sinos y, en otro plano, las disputas de poder entre las élites quedaban en buena medida fuera del campo de observación.

Se tenían, además, expectativas de que la educación en su conjunto y la enseñanza obligatoria del quechua en particular demolieran barreras sociales. En cierto sentido se distorsionaba lo que los propios campesinos y habitantes de la sierra querían en dos direcciones diferentes. Por un extremo, estos grupos aspiraban a apoderarse de habilidades cognoscitivas de los sectores dominantes, accediendo al manejo de sus recursos idiomáticos y culturales. Por otro, a través de lo que venía de sus propias historias y tradiciones establecer alternativas diferentes a un único conocimiento que se impartía desde el mundo oficial.

Quizás estas observaciones no podían ser consideradas tal como se estaba formando el horizonte de interpretación de los cambios culturales de la época y desde la urgencia de emprender una transformación política radical. Visto en perspectiva, se buscaba delimitar las transformaciones de la modernidad en una sociedad que se estaba volviendo cada vez más compleja. Dejaba cabos sueltos, transformaciones interrumpidas y procesos sin entender. No conseguía definir un marco estructurado de referencias que proviniera desde el discurso del poder establecido, pese a que este se presentaba como impositivo y totalizador al no conseguir estabilizar sus propuestas, sus alianzas, su vigencia social. La decadencia de los ya desde antes desgastados poderes oligárquicos crea un nuevo escenario, en apariencia cerrado y congruente, y que, sin embargo, permitía aventurarse a distintos grupos a transitar por diferentes desenlaces. En cierta manera, todo parecía comenzar y la mayoría buscaba establecer sus propias salidas y sus propias síntesis, sin confiar en otros grupos y otros actores sociales.

Esta situación de búsqueda con sensaciones de aislamiento se vivía en las identidades políticas tanto como hemos visto que ocurría con las culturales. Tras la aparente unidad de la propuesta surgieron alternativas dentro y fuera del sistema. Había quienes buscaban crear organizaciones sociales desde el Estado que sustituyeran a las existentes. Otros aspiraban a un cambio con orientación socialista. Algunos consideraban que el proceso debía cumplir un conjunto de tareas estratégicas y luego organizar un recambio para no exponer a las Fuerzas Armadas al desprestigio social y a la división interna. Grupos influyentes defendían la idea de que los partidos obstaculizaban el cambio; se producían, así, singulares afinidades entre propugna-

dores de tendencias radicales con partidarios de la misión tutelar del ejército, desconfiada de los conflictos políticos y de la disputa de intereses.

Fuera del sistema, organizaciones de izquierda apoyaban al gobierno entendiendo que estaba cumpliendo las tareas iniciales de una revolución en la que ellas más adelante iban a tomar el relevo, al mismo tiempo que disponían, desde el Estado, de nuevos canales para vincularse con el movimiento social, lo que explicará en parte su crecimiento posterior. Otras denunciarán el carácter corporativo y hasta “fascista” del gobierno. Mientras tanto, las élites desplazadas y algunas emergentes buscarán la polarización política y social, y la negociación en las sombras.

Ocorre así una extraña conjunción en la que los enemigos irreconciliables coincidían en la idea de que un solo grupo, su grupo, podía entender y representar al conjunto de la sociedad y que, ante el opositor, correspondía desconfiar no solamente de sus ideas sino también de sus intenciones. Ya comienzan a hacerse notar nociones de rechazo a la política o defensa de criterios excluyentes que marcarán la historia del Perú de estos últimos años: estas nociones ya no fueron sustentadas únicamente en razones de discriminación étnica y social.

Estas percepciones serán las que predominen cuando se produce el retorno de la democracia. En élites, en parte transformadas, que buscaban recuperar posiciones, la democracia era el régimen político que les permitía acceder nuevamente a una decisiva incidencia social, pero que podía ser sustituido tan pronto esas nuevas condiciones de apertura política se perdieran. La mayoría de la izquierda que había decidido participar en esta nueva etapa la tomaba como un recurso instrumental, alejada de la disputa del poder. Este conflicto no lo encontraban en la pugna por abrir espacios de deliberación y se lo concebía por fuera de los canales institucionales del Estado de Derecho, algunos a nivel de su discurso, otros de sus prácticas. Esto ocurrió no solo por parte de las organizaciones que recurrieron a la violencia. Recusaban las mismas prácticas de negociación de conflictos y de espacios de disputa electoral de cargos en el congreso y en los gobiernos locales, los que, de hecho, participaban en el sistema. Las consideraban decisiones circunstanciales, provisionales, que iban a ser superadas por una nueva etapa que permitiría el advenimiento de una democracia en profundidad, liberada de ataduras y garantías formales.

LA PRECARIA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y
LOS PROBLEMAS DE INTELIGIBILIDAD DE LO QUE ESTABA OCURRIENDO

En mayor o menor medida, el conjunto de fuerzas políticas tenía que hacer un aprendizaje institucional para emprender las estrategias y adquirir las rutinas que el nuevo sistema democrático requería. No existían precedentes que permitieran recomponer ordenadamente el juego político; no se contaba con referentes que dieran cuenta de una enseñanza previa que pudiera ser recreada a diferencia de otras transiciones latinoamericanas. El país no había conseguido constituir, en los años anteriores al golpe militar, un sistema de partidos estable. El gobierno de Belaunde entre 1963 y 1967 se había caracterizado por un movimiento de bloqueo entre Acción Popular y los partidos de oposición. No parecen haber existido, a lo largo de la historia del país, partidos de integración nacional que fuera más allá de referentes sociales y regionales relativamente delimitados. La ampliación del voto a los analfabetos en 1978 debiera haber obligado, además, a hacer más inclusiva su capacidad de convocatoria, y solo lo lograron de modo muy disperso y parcial.

López habla de incursiones democratizadoras en la historia del país que tienen que ver con la presencia del APRA en 1931, 1945 y 1956, Acción Popular y la Democracia Cristiana en 1956 y 1963, y la izquierda en la década de 1980. Estos procesos tienen que ver, por lo general, con dictaduras que se desgastan, actores sociales y políticos que irrumpen reclamando derechos, crisis económicas que bloquean escenarios de modernización (López 1997).

Visto en perspectiva, faltaba el espacio para que se pudieran formar identidades políticas estables que favorecieran el ejercicio de la representación. Los partidos se encontraban ante la presencia de actores provenientes de una sociedad tradicional que condicionaba el juego político a las negociaciones entre el Estado y los poderes locales, otros de migrantes recientes y, finalmente, grupos urbanos que habían conseguido una relativa estabilidad en sus ocupaciones y sus perspectivas de vida. Solo estos últimos podían ser convocados masivamente por los partidos, darles, por medio de sus programas, líderes y símbolos, un principio de identificación que los vinculara con la sociedad en su conjunto y, a partir de allí, pensar en estrategias que permitieran la agregación de intereses particulares.

En sociedades de cambio solamente la constitución de subjetividades políticas y sociales consistentes y duraderas permite pensar, luego, en una visión más institucional. A partir de allí es que puede razonarse en términos

de grupos sociales con diferenciación de sus expectativas y de configuración de ofertas políticas entre organizaciones constituidas que faciliten una alternancia ordenada en el poder. Se necesita, además, el establecimiento de un marco para que élites de distinta procedencia formulen sus propuestas y se encuentren en condiciones de evaluar el impacto alcanzado ante un electorado extendido. Dicho de otra manera, la discutible idea de un mercado político solamente puede cuajar si antes se han conseguido definir algunas identidades y orientaciones básicas.

Una modernización que no terminaba de gestarse impedía que se desarrollara este juego a dos niveles: el de la conformación de un lazo político que permitiera compromisos básicos con determinados partidos y el de la disposición para, desde estos parámetros primeros de adhesión, se pensara en nexos entre intereses personales y de grupo e intereses públicos. Esta dinámica quedó reservada para un sector minoritario de la población. Velasco trató de establecerla bajo marcos rígidos sin lograrlo y quedaba como tarea pendiente que dependía de la capacidad de acción de los partidos en condiciones económicas y sociales que, como se verá, no les eran particularmente favorables. Por lo que, bien visto, la idea de la incursión queda asociada a la idea de pasaje, de avances que no se pueden sostener en el tiempo, de cabeceras de playa que en definitiva no están en condiciones de defenderse o que, en el mejor de los casos, no ayudaban a ir más allá de lo precariamente conseguido.

Tanto en el plano político como en el cultural, como nunca había ocurrido antes en la historia del país, como probablemente no haya ocurrido de modo tan abrupto en el siglo anterior en ninguna sociedad latinoamericana —porque revoluciones como la mexicana, la boliviana y la cubana sustituían un orden anterior por otro alternativo facilitando que se tomaran decisiones cualquiera fueran ellas y otros países, entre golpes militares y periodos constitucionales, procuraban afirmar, no sin dificultades, una perspectiva de afirmación democrática— en el Perú remecido en sus antiguas estructuras se trataba de establecer, sin caminos claros para hacerlo, un principio de inteligibilidad con lo que estaba ocurriendo que afectaba a todos. Comprometía a antiguas élites, intelectuales desconcertados, estudiantes de distinta procedencia que cambiaban radicalmente de expectativas en relación a la generación anterior, pobladores de ciudades de provincias. Todos ellos con dificultades para establecer un principio de orden, entre incorporaciones puestas

en cuestión y disidencias que podían recorrer todas las escalas en cuanto a niveles de impugnación.

LAS CONEXIONES ENTRE LA POLÍTICA Y LA GUERRA

El mismo día que se celebran las elecciones presidenciales, Sendero Luminoso inicia en Chuschi la lucha armada. Si había oportunidades para la disputa partidaria por el poder, también los años de transformaciones radicales en lo político, lo económico, lo social y lo cultural provocaron el surgimiento de contraélites con aspiraciones de cambio por otras vías. En ellas intervienen jóvenes que contrastan los conocimientos adquiridos en el sistema educativo con su pobreza y su débil inserción ocupacional. La actitud de muchos de ellos fue la de asumir compulsivamente que habían leyes inexorables de la historia que les daban la razón y los conminaban a la acción política sin concesiones. Ellos se sentían los elegidos en las palabras de un jefe redentor que les daba seguridades, una disposición a imponerse a los demás y a sacrificarse si ello era necesario, porque no había camino posible de retorno. Así como la disputa institucional no solamente involucró a élites sino a ciudadanos con distintos grados de convicción y disposición a movilizarse, la guerra no solo fue asunto de militares, grupos alzados en armas y gobierno. Intervinieron también en ella vastos grupos de población, en su mayoría campesinos arrastrados por la contienda, pero también protagonistas activos de la misma.

Ante una situación tan dura de asimilar en lo intelectual y en lo afectivo, una tendencia predominante fue diferenciar la lógica de la política de la lógica de la guerra. Este razonamiento afirmativo, como ocurre con frecuencia, perdido en su buena voluntad, produce desenfoques. La guerra, como se sabe, también estuvo orientada en sus diferentes protagonistas por un razonamiento político que podía justificar el aniquilamiento del adversario por el peso de una ideología fundamentalista o una estrategia antiterrorista, aunque en ayuda de este argumento acudieran también discriminaciones étnicas y desprecio a los campesinos considerados como “masa” o como “salvajes” por unos u otros.

Los problemas que planteaba esta etapa fueron asumidos irresponsablemente por quienes, desde la política o la interpretación social, incurrieron en una suerte de división del trabajo. Los que tomaban en cuenta la guerra dejaban en segundo plano la lógica de los actores políticos en el escenario

institucional, y se precipitaban, a veces, de modo inadvertido, en la idea de los límites de la democracia o de que sus reglas discurren por otro lado y estaría incapacitada como régimen para ocuparse de estos asuntos; ello dará pretextos a los gobiernos para la creciente abdicación de la autoridad política y civil. A lo mejor, inspirados en distinguir entre virtuosos espacios ciudadanos a los que aspirar y un escenario convulsionado, sobre el que llamar la atención, incurrieron en un discurso principista que no estaba a la altura de la situación dramática que vivía el país.

Quienes tenían su atención puesta en lo que estaba ocurriendo en el ejecutivo y en el congreso tomaban el conflicto armado como un dato de contexto, como un sobreentendido, aludiendo a una situación que, en realidad, se desconocía. Y en esta grave disociación incurrieron políticos, militares, gremios empresariales y obreros, intelectuales y medios de comunicación. Ganaba inesperadamente otra vez su sitio una suerte de interpretación dualista de la sociedad peruana que se daba por superada y que tercamente reaparecía. Otros problemas de inteligibilidad se agregaron a los que ya se habían visto en el periodo anterior, con el siniestro dato adicional de que una de las perspectivas que algunos podían tomar en cuenta era la de la eliminación del adversario.

Sabemos que el conflicto se extendió a la sierra centro sur en zonas débilmente integradas al mercado, en donde la reforma agraria en el periodo anterior tenía poco que distribuir o dejaba conflictos irresueltos entre comunidades y nuevas formas asociativas. Se introdujo, también, en lugares en donde había pugnas entre comunidades, comunidades y comerciantes y al interior de cada una de ellas. Consiguió gravitar con fuerza también en la zona nor oriental y en la selva central, donde la construcción de obras de infraestructura auspició procesos de colonización, nuevos conflictos y, en algunos casos, influencia del narcotráfico. También gravitó en la zona central, esta vez asociada a su importancia estratégica en términos militares. En general, si existía presencia del Estado en prestación de servicios básicos, proyectos de desarrollo y autoridades legitimadas, o integración de una zona a circuitos mercantiles amplios que permitía obtener una visión más amplia del conjunto de la sociedad y la definición de estrategias para tratar de insertarse en ella o si había organizaciones políticas y sociales que permitían canalizar las demandas o negociar conflictos, no se precipitaba un escenario de guerra (CVR 2003).

La violencia estallará en una sociedad que ya sabía de la capacidad de cambios que podían darse desde el Estado, la integración al mercado y las instituciones políticas y sociales. Los grupos afectados estaban en condiciones de evaluar y, llegado el caso, sustituir autoridades incompetentes o se consideraban en condiciones de exigir en conflictos de poder “una justicia vertical, firme, impuesta por personas letradas”; ello conducirá a apoyar, en algunos casos y en ciertos periodos, a Sendero Luminoso y, luego, a las Fuerzas Armadas en tanto autoridad interpuesta y no como representante de un orden que los restituyera a una situación anterior. Grupos de campesinos utilizarán el escenario de guerra para dirimir antiguos enfrentamientos por titulación, linderos y zonas de pastoreo.

CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS EN EL CONFLICTO

Este protagonismo de algunos grupos afectados por la violencia no significa que la guerra no haya sido en buena medida también entre desconocidos que, si querían llegar a una objetivación de la realidad, tenían a su vez que convertir a las personas en objetos mismos, estereotiparlas para encontrar así razones para su furia, su desprecio o su temor. Los soldados son vistos como extranjeros y, durante la mayor parte del proceso, actuaron como un ejército de ocupación convencido de que podía torturar, asesinar, ejecutar, violar a quienes calificaban de inferiores; además, consideraban, a cada campesino y campesina, una persona sospechosa. Víctor Vich, en su ensayo *El canibal es el otro*, muestra que Mario Vargas Llosa, en su libro *Lituma en los Andes*, hace aparecer a los andinos de las comunidades en la celebración de ritos que nos son dados a conocer por el observador y en los que se incurre en canibalismo (Vich 2002). Los extraños podían ser literalmente engullidos.

Quizás haya un desplazamiento más que puede agregarse al comentario del crítico. Lituma es un sargento que, en una obra anterior, se movía con soltura en Piura y en la zona del Maraón y ahora se encuentra trasladado abruptamente a una provincia de la sierra, recurso inesperado de un escritor que solamente de modo ocasional repite un personaje de una a otra novela. La excusa ante sus propios prejuicios es que, finalmente, es Lituma el que habla. Sin embargo, no consigue resolver que se escuche con la misma fuerza las voces de los campesinos. Además, no se alcanza a discernir ni lo que el personaje ni lo que el autor están entendiendo, lo que contrasta con lo

que ha sido por lo general la propuesta literaria del escritor. La amenaza sentida se vuelve, a la vez, amenazante cuando un intelectual cosmopolita, debatiéndose desde la ficción para dar un testimonio, no alcanzaba a comprender lo que estaba ocurriendo. Poco podía esperarse, entonces, de soldados que a veces fueron reclutados por la leva, armados, temerosos de su vida y que odiaban a un enemigo al que no terminaban de identificar.

Sendero Luminoso puede convertir a los campesinos también de conocidos en desconocidos; ello debido a la idea de haber adquirido los insurgentes un conocimiento presuntamente científico de la realidad que los distancia definitivamente de los otros. Desatada la guerra, se superponen los tiempos. Se puede hablar de dominación de clase y sustituir a los hacendados por un mediano propietario, una autoridad tradicional, comerciantes, funcionarios. Ganados por una devastadora racionalidad, y por una fe persistente que la complementa, los campesinos pueden ser “mesnadas” al servicio del viejo Estado o, simplemente, ignorantes a las que se les somete a un persistente desprecio étnico y social y, por ello, pueden ser perseguidos, esclavizados, sacrificados.

Ocupan los intersticios de esta historia de violencia los que se comprometieron ocasionalmente con los grupos alzados en armas por la fuerza o por convicciones circunstanciales, los que consiguieron salir, los que no tuvieron oportunidad de revisar sus primeras certezas. La literatura estuvo más cerca de seguir estas trayectorias que las ciencias sociales y los medios de comunicación que, generalmente, solo conseguían entender lo que estaba ocurriendo atendiendo al fanatismo o la ceguera de la razón, sin detenerse a examinar las duras opciones a las que la población estaba sometida, los juicios primeros, los cambios de opinión, los desistimientos.

LAS INSTITUCIONES SUJETAS A EVALUACIÓN

A mediados de la década de los ochenta, la sociedad parecía estar tensada al máximo y se viven, casi al mismo tiempo, los esfuerzos últimos del proceso de modernización que se había estado gestando desde dos décadas atrás en contradictorios esfuerzos de incorporación social y, al mismo tiempo, se asiste al agotamiento de las perspectivas de aquellos que, no sin contratiempos, habían conseguido definir un horizonte de transformación en sus proyectos individuales y colectivos. Es como si hubieran ocurrido, a la vez, el apogeo y el fin. El compromiso con una gran transformación y el abandono

definitivo del impulso que lo motivara. El esfuerzo de integración es seguido por una nueva desconexión entre los peruanos y peruanas.

Se han señalado los esfuerzos de llegar a una democratización dirigida desde el Estado. Quedaron núcleos excluidos que se enfrentaban a conflictos que no habían sido superados y otros que surgían. Habían crecido las expresiones asociativas. Y, en el proceso, ocurría que el corporativismo —esta vez no solamente como estrategia política, sino como persistente rasgo cultural— con su pretensión de darle a cada uno su lugar favorecería la creación de organizaciones de intereses limitados, restringidos, partidos que no pueden disociar su desempeño en el conjunto del sistema político y el apego a un grupo restringido de apoyo, limitado a gremios empresariales, campesinos u obreros según la orientación y habilidades de cada fuerza política.

Se estaba dando entonces una modernización sin espacio público a la que se agregan las ya mencionadas dificultades en la constitución de identidades. Y, en un plano de intercambios más personalizados, se debe atender también a las vicisitudes a las que tenían que enfrentarse quienes trataban de ir articulando redes horizontales, sin una definida trama institucional de referencia. Ya no era, por cierto, el mismo escenario tradicional en el que, en el trasfondo de los vínculos de los grupos más postergados, pesaban los elementos adquiridos de relaciones comunitarias y familiares.

Sin embargo parecía, en algunos casos, haberse realizado un recorrido circular para enfrentarse a parecidos problemas que se vivían en la sociedad de la que habían decidido alejarse. Los vínculos de pequeños grupos si ya no eran los familiares y comunales tenían que ver con lealtades de pequeño grupo, renuencia a establecer relaciones más amplias, un continuo armar y desarmar las relaciones de confianza más amplias. Ello ocurrió no porque las personas se hubieran abierto a una disposición pluralista en el momento de pensar en referentes —quizás solo hubo avances parciales en esta dirección—, sino porque se estaba respondiendo a una dinámica de desertiones y nuevos intentos casi siempre en espacios confinados.

Buena parte de la dinámica del sector informal transcurrirá bajo estos supuestos que, en cierta manera, recrean lo que en otro plano tenía que ver con las personas que reclamaban por normas que estabilizaran conductas y que, al mismo tiempo, manifestaban —entre la contradicción y la congruencia con la situación establecida— su voluntad de transgredirlas.

Aun en medio de estas dificultades y de la violencia política que seguía golpeando, no debe subestimarse que se estaban gestando identidades sociales modernas. Ellas no pueden entenderse solamente como una disposición genérica al cambio, una suerte de activismo sin sosiego de la voluntad, como a veces parece entenderse, sino como la capacidad de enfrentarse con instituciones que pueden evaluarse, que se las toma en sus capacidades de orientar y ordenar conductas así como en sus dispositivos para introducir disciplinamientos que se aceptan o que son resistidos. En pocas décadas, la mayoría de la población sabía qué exigirle al Estado en términos de políticas, servicios, principios de ordenamiento de la vida social, trama de autoridades —y los que les corresponde hacer a cada una de ellas—, así como en la administración de principios de justicia. Se asiste, entonces, a la convivencia entre la expectativa y la crítica.

El mercado se vincula a ideas de diferencias entre unos y otros pero, también, a la noción de marcos institucionales que debieran ordenar la competencia. Y la trasgresión de ellos no se debía a livianos desconocimientos sino a que no había otras condiciones para prevalecer. Este mercado, como cualquier otro, estaba embebido de tensiones sociales y no se trataba de un espacio relativamente neutral de cálculo de costos y beneficios. La gente, envuelta en pequeños y grandes negocios, legales y no legales, ya sabía bien de lo que se trataba. La educación, por su parte, probablemente había agotado parte de sus “energías utópicas” —energías que llevaban a pensar casi en relaciones de causa y efecto, entre formación adquirida y el progreso personal—. Se entendía, de todas maneras, que marcaba para la mayoría un cambio de horizontes entre las generaciones que habían estado al margen de ellas y las que se integraban al sistema. A los partidos cabía exigirle proyectos de cambio o de orden, y la doble inserción en la dirección del gobierno y en la atención de demandas.

No eran ninguna de estas instituciones —Estado, mercado, sistema político, educación— las que daban un principio de racionalización a los sistemas sociales tal como lo pensaban los clásicos de la Sociología y de la política. Estaban asediadas todas ellas por su irrelevancia y su pérdida de sentido, y aun así las personas sabían que debían formular opciones haciendo intervenir tanto sus diversos márgenes de libertad como los referentes que ayudaban a darle un contenido relativamente estable a las opciones que se tomaban. Algo se había avanzado de todas maneras. Con todo el peso de lo acontecido había transcurrido un acelerado tiempo de la historia

atravesado de un sinnúmero de contratiempos y, si algo estaba sobrando, era el fatalismo de que nada podía cambiarse, aunque la guerra y la cada vez más notoria crisis económica no permitían aventurar fáciles optimismos.

APOGEO Y CRISIS DE LA MODERNIDAD POLÍTICA

Y, sin embargo, en el país ocurre un desenlace desconcertante. Lo que debía ser comienzo termina convirtiéndose en clausura. Y es que las dos formas de partidos de integración de masas en la historia de América Latina y del Perú, el que asume el discurso populista y el que toma referentes clasistas, llegan al máximo de su influencia política y electoral cuando ya la capacidad de seguir con esta misma integración que proponían se encuentra severamente afectada. Estos partidos culminaron el proceso de la modernización en el umbral mismo de su decadencia contradiciendo las imágenes ordenadas que parten de la idea de una continuidad lineal, etapa por etapa.

Así, el triunfo del Apra en las elecciones de 1985 parecía situarnos en un escenario, en otros tiempos familiar en la región, de búsqueda de ampliación de las funciones del Estado, radical politización de la economía y una apelación a la idea de que las demandas populares iban a ser finalmente contempladas. Pareció tratar de imponerse una retórica populista en la que el pueblo era tomado como unidad en sí mismo, relativamente indeterminado en sus características, convocado por medio del establecimiento de un principio de diferencia respecto de un adversario principal a quien dirigirse. En este caso, los actores a quienes oponerse eran los que determinaban las injustas reglas del mercado internacional y la deuda externa. Un líder trataba de dar cuenta de las contradicciones existentes, y las sintetizaba a su manera asumiendo un comportamiento elitista de nuevo estilo.

En el caso del Apra, en parte debido a la conducción de Alan García, estas manifestaciones expresaban en buena medida una cultura cerrada, poco dispuesta al diálogo, corporativa nuevamente más que pluralista que, más allá de las dificultades que iba a encontrar posteriormente su gobierno, trababa, desde el inicio, de buscar ese encuentro con los sectores populares cuya adhesión trataba de establecerse o de renovarse.

La sociedad era ya demasiado compleja y heterogénea como para articularla desde un solo principio de cambio. Había disputas y preocupaciones que les quitaban espacio a las síntesis totalizadoras; además, las disputas por la hegemonía política y cultural se disparaban en varias direcciones a la

vez. Y las personas no parecían estar dispuestas a dejarse convencer por propuestas de rasgos limitados, poco sensibles a entender la creciente diversidad, aun al interior de los grupos más pobres.

Los discursos de izquierda, como ocurría por aquellos años en América Latina, tratan de sustentarse en programas ideológicos detallados y poco flexibles, se apoyan en organizaciones políticas que, a diferencia de los partidos de notables, trabajan sostenidamente con la población y no solamente en tiempos de elecciones; además, intentaban ganar influencia en los sindicatos y las organizaciones sociales de base ya existentes. En el caso peruano, la Izquierda Unida no llegó a definir una lógica de coalición que trascendiera en su influencia la de las organizaciones políticas relativamente débiles que la integraban, al margen de las diferencias ideológicas que separaban a unas y otras, y de la existencia de grupos alzados en armas que ejercían prácticas terroristas y que proclamaban principios pretendidamente revolucionarios que asociaban, cuestionaban, amenazaban.

La izquierda logró, en un corto periodo, a mediados de la década de 1980, ser, como frente, una organización de alcance nacional. Visto partido por partido lo que ocurrió, más bien, fue una ilusión de representación política. Estas organizaciones se volvieron especialistas en defender intereses segmentados de parte de la población pero, a diferencia de los partidos de masas históricos, no podían partir de la llamada clase *gardée*, de su grupo de convencidos, para trascender desde allí y lograr una convocatoria más amplia. No es paradójico decir que, en su pretensión de ser extremadamente representativos, dejaban de serlo, que la propia noción de intereses diversos y públicos se iba perdiendo en estos grupos tanto debido a problemas de interpretación acerca de lo que estaba ocurriendo en el país, como debido al despliegue de sus propias rutinas de acción —ir a lo seguro en cada oportunidad, lo que les ayudaba a sacar ventajas de corto plazo y a la vez les impedía alcanzar una mayor proyección.

En la sociedad, este agotamiento de las perspectivas de inclusión tenía que ver con el creciente grupo de personas que quedaba en tránsito y fuera de sitio en los dilemas y bloqueos del avance a la modernidad en el Perú. El núcleo más duro lo constituían, como vimos, los campesinos de algunas zonas de la sierra, víctimas y protagonistas de la guerra. En las grandes ciudades, especialmente Lima, se sentía en particular el crecimiento del sector informal, asociado en su mayor parte a condiciones de pobreza, en el que un

grupo minoritario conseguía una progresiva afirmación en pequeñas empresas y negocios.

Matos Mar caracterizó este proceso como de “desborde popular” (Matos Mar 1984). Quizás, siendo certera la imagen y buena parte de la descripción de lo que estaba sucediendo —visto este razonamiento en perspectiva—, pareciera que la mayoría de actores sociales daba un paso más en el reconocimiento y la crítica a la distancia histórica existente entre el establecimiento de normas en lo jurídico, lo político, lo cultural respecto de su efectiva vigencia social. Y no se trataba de que estuviera construyendo a su modo otras instituciones, ¿qué instituciones? Este paso adelante tenía que ver con que ya no se trataba de un silencioso desconocimiento de la ley por el peso de otros hábitos y costumbres. Definidamente, se alentaba una abierta transgresión. Y en ella había tanto de marginación y de acatamientos formales e incumplimientos de hecho, como de creatividad en la búsqueda de alternativas ante poderes establecidos que se resistían a entender el alcance de los acelerados cambios que estaba viviendo la sociedad.

Si bien se asistía a nuevas expresiones de una cultura popular, no había maneras de pensar en un orden alternativo, en nuevos sujetos que podrían encontrar principios de confluencia y de articulación. Quizás, como se verá después, fue al autoritarismo el que a su modo logrará establecer sentimientos y valores compartidos entre pobres que se parecían cada vez menos los unos con los otros.

EL FIN DE UN ESTILO DE VINCULACIÓN ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD

Hasta que lo que ya se estaba gestando en la sociedad y en la política termina estallando cuando ocurriera, como en el conjunto de la región, la acelerada decadencia del llamado modelo Estado-céntrico. Varias razones lo explican: el peso de la deuda externa y el recurrente déficit fiscal; la erosión de las condiciones de competitividad en el proceso de aceleradas innovaciones tecnológicas y de flexibilidad laboral, que ya se hacía notar en el contexto internacional desde una década atrás, pero que ahora irrumpe en el país con una inesperada fuerza; la concurrencia de capitales venidos del exterior orientados a la especulación financiera en mercados inestables con rápidos flujos de entrada y salida; las dificultades del conjunto de actores políticos de encontrar respuestas alternativas en un nuevo escenario que consiguiera evitar o limitar un considerable costo social.

Se pone en cuestión el tipo de intervención del Estado que hasta entonces se había seguido, así como los pactos inestables que lo unían con sindicatos obreros, con algunos grupos empresariales vinculados sobre todo a la industria y con empleados públicos; los gobiernos, y más directamente los presidentes, trataban de regular y de arbitrar dichos pactos. En el Perú se opta por una fuga hacia delante cuya medida más significativa fue la estatización de la banca, que se junta en la misma etapa con la hiperinflación mientras se sigue extendiendo la violencia política.

Demasiados cambios en tan corto plazo, desconexión social, desconfianza entre personas y con las instituciones, violencia, crisis terminal de un modelo de crecimiento económico, decadencia del pluralismo asociativo que, en realidad, como se ha visto, nunca había llegado a cuajar del todo en el país y desconocimiento de normas producen una redefinición de las identidades en lo personal, lo político y lo cultural. La mayoría de las personas, sobre todo aquellas de procedencia popular, se va quedando sin etapas significativas, discernibles, para construir cada uno a su modo su propia biografía y ubicarse en relación con los otros. Estos aparecen distantes, a menudo desconocidos, impenetrables en la medida en que la mayoría estaba viviendo parecidas historias de temores, inseguridades y rechazos que dificultan una abierta comunicación.

Es una sociedad en que las personas sienten que la política gravita de manera creciente y a veces insidiosa en sus vidas. Al mismo tiempo, se hacen sentir los problemas contemporáneos de una sociedad a la que no se le puede ubicar un centro y se hace notar la ausencia de razones o de creencias para pensar en órdenes estables. La acción política transcurre a través de decisiones que se van tomando caso por caso ante el desdibujamiento de las imágenes compartidas y de los proyectos integradores, y la irrelevancia con que son vistas algunas tradiciones y algunos cambios recientes. Hay un problema en la formación de actores representables a los que pudiera atribuírseles la condición de seguidores relativamente confiados de algún alineamiento político.

EL DESDIBUJAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN

Quizás en un plano filosófico estas definiciones inestables de identidad son propias de toda forma de representación. Sin embargo, como señala Laclau (1997), lo que en sociedades relativamente ordenadas quedaba parcial-

mente oculto ahora es visible y perturbador, y deja en parte fuera de sitio a los partidos y a las expectativas de integración política.² Si las personas no tienen puntos de partida fácilmente reconocibles ni por los demás ni por ellos mismos, quizás haya que pensar en las potencialidades de las identidades dislocadas con interpelaciones que van desde la clase social, al género o a la etnia. Y desde cualquiera de estas procedencias hay puntos de fuga como oportunidades para nuevas articulaciones, que van desde los grupos formalizados hasta la irrupción de algunos movimientos sociales poco dispuestos a organizarse por su resistencia a fijar rutinas burocráticas. En todo caso, como se irá viendo, la política en el Perú pasa por periodos de latencia y por bruscas irrupciones desde múltiples espacios, lo que pone en cuestionamiento algunas interpretaciones estrictamente disciplinarias que se queden enclaustradas en sus convenciones y sus paradigmas.

En estas condiciones, se va haciendo cada vez mas dificultoso establecer vínculos entre formación de identidades sociales y constitución de un sistema de partidos entendido como patrones de interacción sujeta a reglas y regularidades que son, por lo general, observadas por los actores que intervienen (Mainwaring y Scully 1995).³

No ha podido fijarse para el periodo patrones previsible de competencia electoral. Acción Popular, triunfador en las elecciones de 1980 no tiene relevancia como competidor político en las de 1985; si cobra alguna vigencia en la de 1990 es en la coalición del FREDEMO, de la que no es una fuerza política decisiva. El grupo conservador Partido Popular Cristiano ha sido socio menor en algunas alianzas. El APRA, protagonista decisivo en los comicios de 1985 pasa de cerca de la mitad del electorado en aquel año al 20% en 1990 y se toma como ejemplo de persistencia cuando pierde a más de la mitad de su electorado, a lo que se agrega en los electores que no siguieron esa opción, un sostenido y vehemente rechazo. La izquierda legal que, en todo el periodo de los ochenta, tuvo dificultades para actuar como un frente en que los aliados se comportaran lealmente va perdiendo capacidad de convocatoria.

2. Véase también Novaro (2000).

3. Para los autores, un sistema de partidos institucionalizado requiere de estabilidad en las reglas de la competencia interpartidaria, enraizamiento de las principales de estas organizaciones en la sociedad, acuerdos sobre la legitimidad del proceso electoral y niveles consistentes de organización interna.

Los partidos no tomaban a los otros como parte de un mismo sistema, salvo en algunos momentos y tendían a seguir dinámicas centrífugas. Cada elección era una historia aparte en la que los grupos políticos en competencia no eran los mismos que en los comicios anteriores. Por lo que, si bien puede sostenerse que los partidos mantuvieron hasta 1990 la mayoría de bancas en el congreso —y los números cuadran entonces para señalar que la bancarrota de ellos no fue hasta entonces tan severa como generalmente se considera y, además, una legislación electoral más restrictiva hubiera bloqueado en parte el acceso a independientes—, aun así es razonable suponer que una creciente extensión de sentimientos antipolíticos estaban en condiciones de erosionar organizaciones que no consiguieron establecer un sistema que organizara la vida institucional del país. Estas fuerzas tomaban vigencia, la perdían rápidamente, se desdibujaban. No daban condiciones de estabilidad ni para su propio personal político y menos a sus cada vez más desconfiados seguidores, hasta que las adhesiones terminaban en abandonos, desistimientos y también hostilidad.

Faltaba también en estos partidos, por lo que ya explicamos, un enraizamiento de la representación confiados como estaban en un “electorado fiel” que representaba intereses cada vez más limitados mientras la mayoría de la sociedad buscaba otras orientaciones y referentes. Y no tenían una organización interna consolidada. El peso de su convocatoria se apoya finalmente en los liderazgos que se pudieran tener. Es cierto que, en América Latina, estos liderazgos con frecuencia han importado más que la trama organizativa, pero en el caso peruano el descuido de la voluntad de afianzar asociaciones desgastaba hasta los mismos personalismos que se querían imponer.

Se acostumbra a señalar que uno de los problemas de los partidos en América Latina, y en particular en el Perú, es la falta de equilibrio entre la función representativa y la gubernativa. La primera está supeditada a seguir intereses de corto plazo; la segunda, obligada con frecuencia a tomar opciones que la pueden separar de sus electores. Los políticos trataron de resolver generalmente sin éxito este dilema. En el país, los dos problemas ocurren al mismo tiempo. Las élites partidarias se van desprendiendo de sus referencias sociales pero, a la vez, no cuentan con una red de simpatizantes que constituya un grupo influyente de funcionarios o profesionales conocedores de temas que pueden ir desde las finanzas públicas, la administración en salud o la ejecución de políticas sociales, por mencionar algunas especializaciones

que tienen que ver con las responsabilidades del Estado. Por lo que, en buena parte de la década de 1980, la conducción pública de los partidos se caracterizará en buena medida por la improvisación, el clientelismo o el recurso a independientes; estos independientes harán que sus opiniones técnicas se conviertan en un decisivo argumento político y se impongan a razonamientos alternativos mal fundamentados. Estas actitudes anticipan de alguna manera un escenario en que la falta de opciones partidarias se irá progresivamente traduciendo en indiferencia hacia el régimen democrático; ello facilita una convicción, en esta línea, que el autoritarismo llegará a hacerla parte de un sentido común compartido.

LOS NUEVOS CAMBIOS CULTURALES

En otro plano, señalamos que se van constituyendo identidades dislocadas que no terminan de construir un relato articulado de lo que les está ocurriendo, que la toma decisiones se caracteriza en parte por este desplazamiento y la política es una de las tantas expresiones de este proceso. Sin embargo quizás ya no estemos en las grandes ciudades ante un sujeto inestable, escindido, situado en mundo antagónicos. El migrante ya no es el actor decisivo de años atrás. Pierden gravitación las personas que no articulan los sitios en los que estuvieron y en los que están situados, lo urbano y lo rural, que se multiplican y se desbordan en “una armonía imposible”, como señala Cornejo Polar que sentían los protagonistas de las obras de José María Arguedas (Cornejo 1994).

Lima es, sobre todo, una ciudad de hijos y nietos de migrantes. Sus aspiraciones y sus vivencias van por otro lado; ya no viven tensiones entre culturas sino que hacen un bricolaje en la que estarán —recuerdos entre otros recuerdos, probablemente— desvaídas tradiciones campesinas, músicas de distintas procedencias, presiones y alternativas laborales que pasan por nuevas ocupaciones, seducción por el consumo con una creciente influencia de la cultura estadounidense, nuevas afirmaciones de su condición de personas a la que una simplificación sociológica llama proceso de individualización. Los jóvenes limeños de una o varias generaciones ya no pueden calificarse como divididos principalmente entre andinos y criollos, y afirmarlo así es un razonamiento anclado en un periodo anterior, nostálgico por establecer diferencias y cuestionamientos en parte superados, conservador aun

en su empeño crítico. Las experiencias se van haciendo comparables tanto en los intentos de integración social como en las modalidades de segregación. Y, si existe una sociedad civil segmentada, los puntos de desencuentro ya no se pueden establecer desde un solo principio de entendimiento y referencia. En cierto sentido, las separaciones tajantes y la síntesis integradora que pretendió establecer diez años atrás el velasquismo habían sido superadas por un proceso más desordenado, dramático y creativo.

TIEMPOS DE PERSONALIZACIÓN DEL PODER Y EL LIDERAZGO EN UNA SITUACIÓN “EXCEPCIONAL” Y CRÍTICA

Vista en perspectiva, la derrota del FREDEMO en 1990 se encuentra en el revés de la trama de la irrupción de una persona por fuera del sistema como Fujimori. Es una nueva derrota de la oligarquía —por lo menos lo que expresaba ello en lo cultural más que en lo social y lo político—, ya que esta primera fuerza, pretendiendo darle a su propuesta un aire renovador, asumía en su discurso el tono de restauración de un viejo orden. Tanto o más que la promesa acaso bien inspirada de construir un nuevo país, el estilo de comunicación del FREDEMO poco tenía que ver con una sociedad que se había democratizado y cambiado en sus códigos de expresión y de reconocimiento. Este suceso, en otro plano, puso en jaque las condiciones para un ejercicio elitista de la acción política y esta situación hasta el presente parece no haber cambiado. Vargas Llosa oscilaba entre un discurso pedagógico que marcaba, y hasta con obstinación, la diferencia que lo separaba de aquellos a quienes quería convencer. Y, en otro plano, procuraba un contacto directo con los potenciales electores, tarea que parecía asumir como un sacrificio personal, como si le preocupara destacar en cada encuentro una separación y un límite. Pierden vigencia también los profesionales que estaban en condiciones de organizar las ofertas políticas para que los ciudadanos eligieran sin alterar los parámetros que establecen quienes ejercen el poder. Es más, el episodio en que Vargas Llosa amenaza con la renuncia por supuestas presiones de los partidos políticos de su coalición constituye la coyuntura en que alcanza su mayor popularidad.

El triunfo de Fujimori, como se sabe, responde a un debilitamiento del centro político por el fracaso de los partidos que aspiraban a ocupar parte de ese espacio —primero Acción Popular y luego el APRA— y el debilita-

miento de los extremos, la izquierda y el FREDEMO.⁴ Tiene que ver además con un proceso de identificación con el candidato que no solamente se debe a sus características populares, un lugar común en que se sigue insistiendo. Se asocia, también, a que la sociedad estaba llegando al epicentro de la volatilidad política en la que se desconfía de los antecedentes de quienes son conocidos, como si ello fuera un peso muerto, un lastre a descargar. Se prefiere optar por una vía alternativa en una sociedad atenazada por la violencia que se va extendiendo al conjunto del país y por la hiperinflación.

Fujimori comprende rápidamente que, en un contexto de incertidumbre, las políticas de ajuste estructural otorgan en sus primeras etapas un principio de orden como lo habían entendido también Paz Estenssoro y el MNR en Bolivia, Salinas de Gortari y el PRI en México, y Menem y los justicialistas en Argentina antes de que se hicieran evidentes la corrupción de sus gobiernos y, sobrellevándolas en sus primeras etapas, y con credenciales menos represivas, tiempo después, Cardoso y el PSDB en Brasil. Y, en el caso peruano, Fujimori valora también las ventajas que le iba a procurar aliarse con la cúpula de las Fuerzas Armadas mientras estuvo vigente el proceso subversivo y con posterioridad a la derrota de los grupos alzados en armas. Intuyó que una institución debilitada podía ser manejada por un operador político como Vladimiro Montesinos, conocedor del mundo militar y, a la vez, rechazado por parte de la oficialidad. El Presidente podía jugar con lealtades que empezaban y terminaban en su mandato, siguiendo reglas que poco tenían que ver con lo que la Constitución y las leyes habían establecido en términos de prerrogativas, línea de mando y ordenamiento interno.

El titular del ejecutivo juzga con lucidez que eran tiempos propicios para un exacerbado personalismo y que una propuesta excluyente en lo político y social podía presentarse como asociada al escenario de cambios que los ciudadanos estaban reclamando. Ocurre así que el gobierno, si bien se asocia con los grupos de poder, sugiere en sus estilos de proceder rasgos marcadamente antioligárquicos. En efecto, los intereses compartidos entre sectores dominantes y Fujimori no se trasladaban a modos de expresarse, gestos, expresiones culturales, historias personales, sensibilidades que se fueran encontrando. El Presidente y las nuevas élites se veían como intrusos

4. Aquí seguimos de cerca la exposición de Tanaka (1998). Sobre el espacio de centro ocupado por Fujimori existe amplia coincidencia en las ciencias sociales peruanas.

que podían sacar ventajas de recorrer juntos un largo trecho. Los viejos señores y los jóvenes administradores y economistas formados en universidades americanas por un lado. El recién llegado que sacaba partido de su inescrutabilidad por el otro. Y esta distancia fue percibida por los sectores populares que le dieron a Fujimori oportunidades para un estilo de conducción que, invocando una presunta franqueza y receptividad respecto de las demandas de los más pobres, podía persuadir de que el seguimiento de formalidades institucionales no eran otra cosa que estrategias oportunistas de políticos que fracasaron y que ya estaban definitivamente desplazados.

La personalización va cobrando sentido por la imprevisibilidad de las situaciones que el Presidente tiene que enfrentar y en las que intenta persuadir de que no tiene que dar cuenta si es que quiere estar a la altura de los requisitos que exigen coyunturas de urgencia que alteran agendas previstas y obligan a la celeridad. La influencia de los medios y el estilo de presentación en ellos de las personalidades políticas favorecen también este proceso de personalización. Estas características de una u otra manera están presentes en la mayoría de las sociedades contemporáneas y modifican los estilos de formación de juicios políticos, sustituyendo, en buena medida, a un espacio público relativamente estructurado por una difusa y maleable opinión pública. Ello afecta la modalidad de representación hegemonizada por los partidos. Lo que es una tendencia relativamente impersonal en un movimiento brusco de torsión, Fujimori lo convierte en un calculado ejercicio de dominación política.

Quedaba, solamente, dar el paso posterior que tenía que ver con transmitir la idea de que una sociedad desguarnecida necesitaba políticas de excepción de las que tenía que responsabilizarse un líder capaz de tomar decisiones ya no solo prescindiendo de formalidades sino imponiéndose sobre ellas.

En el discurso de Fujimori se encuentran las críticas de larga tradición dirigida a los parlamentos como gobiernos de aficionados enfrascados en discusiones banales, abusadores de su inmunidad y de sus dietas, expertos en obstaculizar el poder supuestamente objetivo y neutral del presidente. El gobernante sacaba partido de la doble legitimación en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, la del congreso y la del titular del ejecutivo. El primero presentado como el desperdigamiento hasta la incoherencia de intereses particulares. El segundo, expresión de un principio de unidad que, en una situación crítica, justifica que su titular ya no se mueva en una opción

entre otras disponibles, sino que lleve adelante aquello que inevitablemente se tenía que hacer, en una sociedad exhausta que ya no está en condiciones de imaginar otras alternativas.

Esta línea puede llevar a nociones cercanas a las de la dictadura comisarial de Schmitt cuando este señala que “si por motivos prácticos los representantes del pueblo pueden decidir por sí mismos entonces ciertamente un solo representante asignado puede decidir en nombre del pueblo. Sin dejar de ser democrático, la argumentación justifica un cesarismo antiparlamentario”.⁵ De esta manera, Fujimori cubre, para la mayoría de los ciudadanos, el conjunto del espacio de reconocimiento político sin que se sienta que ha violentado los procedimientos democráticos sino en el preciso límite en que resultaba inevitable su transgresión.

Este mensaje es, en cierto modo, fortalecido por un obligado retorno por presión internacional al cumplimiento de algunas formalidades, la primera de ellas el llamado a un Congreso Constituyente Democrático. Convoca a un parlamento desacreditado desde su origen, dependiente de sus iniciativas y con legitimidad electoral. Quizás por estas razones hasta fines de los noventa será tan difícil, tanto para la población como para algunos académicos, identificar los rasgos autoritarios de su gobierno.

UNA RADICAL TRANSFORMACIÓN EN LA POLÍTICA Y LA CULTURA

No es propósito de este artículo examinar con detenimiento el proceso de los noventa sino examinar los rasgos que alteraron los criterios que definían el orden político y social tal como hasta entonces se pensaba y su influencia en identidades y percepciones ciudadanas. El gobierno de Fujimori consiguió producir un profundo cambio político y cultural. Señalemos algunas de estas transformaciones. Impulsó ideas y sentimientos contra los partidos que consiguieron arraigarse en las convicciones de la mayoría de las personas y desprestigió la idea de la sociedad civil como red de asociaciones que expresan diferentes objetivos y demandas, promoviendo la noción de que ambas instancias habían terminado siendo el espacio para la defensa de privilegios corporativos de determinados grupos. Desplazó la idea del igualitarismo que ahora debería depender de mecanismos de mercado con exclusividad.

5. Citado de *La crisis de la democracia parlamentaria* de Schmitt por Manin (1998).

Mientras que la acción pública se legitimaba por resultados que no eran discutidos con la población. Ellos eran consecuencia de acuerdos entre gobiernos y técnicos que se presentaban como presuntos defensores de proyectos que se imponían como discurso obligado de ingreso a la modernidad. Intentó persuadir de que las responsabilidades del Estado no pasaban por políticas inclusivas como las de salud y educación para enfocarlas a la atención de políticas sociales dirigidas a los grupos más pobres que no procuraban cambiar sustantivamente su situación, y mantuvo a estos grupos sujetos a la satisfacción de sus necesidades inmediatas e impostergables. Introdujo, además, parcialmente criterios alternativos de realización para las personas asociados al consumo antes que a la estabilidad ocupacional y también, hasta donde pudo, intentó “naturalizar” las distancias sociales, propósito en el que, en buena medida, intervinieron los medios favoreciendo la creación de una cultura popular autocentrada, envuelta en sus propias disputas, una cultura que aceptaba sus presentes condiciones de vida como inevitables.

En los primeros años del gobierno de Fujimori se pasa, en efecto, de un antipartidismo reactivo a un antipartidismo cultural —recogemos la distinción realizada por Torcal, Gunther y Montero (2002)—. En el primer caso se critica a las élites políticas por el acceso a presuntos privilegios y la inconsistencia entre las ofertas formuladas y su cumplimiento posterior. Se considera, además, que las organizaciones políticas no se hacían responsables de sus errores, usaban de modo indebido los recursos públicos y se involucraban con frecuencia en casos de corrupción.

En el antipartidismo cultural se tiende a considerar que los distintos partidos se parecen unos a otros y que ellos, en su conjunto, introducen divisiones arbitrarias entre los ciudadanos. Desde estos supuestos puede haber rápidamente un cambio de actitud en la que la crítica a los partidos es desplazada por un cuestionamiento a la democracia como régimen político. Este movimiento les otorga vigencia a líderes autoritarios o personas que pretenden ganar convocatoria por fuera de la institucionalidad existente, aun cuando ella ya se encontraba desde antes severamente afectada en su legitimación.

El fujimorismo avanza, además, en la tarea de desconocimiento de una sociedad civil cuya debilidad, como ya se ha anotado, resultaba ya perceptible en la década anterior. Lo poco que queda de las organizaciones sociales de base, las de obreros, las de empleados, unas pocas vecinales y regionales, son vistas como privilegiadas, paradójicamente desde que se establece su

condición de aislamiento. En la medida en que aumentan las situaciones de precariedad laboral, provocada por el mismo gobierno que cuestiona supuestos privilegios, los grupos que tienen márgenes de regulación cada vez más reducidos aparecen como coaliciones que ponen obstáculos a los subempleados y a los trabajadores por cuenta propia. A partir de una fragmentación que compromete a distintos sectores de postergados se procura, y a menudo con éxito, provocar antagonismos aun entre aquellos más afectados en términos de distribución de ingresos.

La decadencia de los actores sociales y los vínculos cada vez más difíciles de establecer entre unos y otros traban las expresiones de protesta social. Ello agrega una razón más para que, desde el gobierno, se argumente sobre la falta de representatividad de las organizaciones existentes. En algunas etapas, los movimientos sociales pueden ser desacreditados por el poder sin necesidad de una prédica sostenida en su contra ni el ejercicio de una represión sostenida, salvo en algunas coyunturas críticas. Lo que adicionalmente deja espacio libre para que el gobierno consiga imponerse sin contrapesos, tratando de ganar para su proyecto a los más pobres, sin que tenga mayor influencia una prédica alternativa.

La defensa de la economía de mercado como espacio autorregulado—no obstante la activa intervención del gobierno y de grupos de poder asociados con este para su promoción y funcionamiento posterior—introdujo, además, nociones de igualitarismo social en las percepciones de un considerable número de ciudadanos. Podía señalarse que había un amplio espacio para iniciativas personales—y parcialmente existían—, por lo que las responsabilidades de lo que finalmente se obtenía se trasladaban a lo logrado en el plano personal y de grupo, dejando entonces en segundo plano lo que pudiera estar aconteciendo en el orden político. Como en los hechos se trataban de mercados en extremo segmentados, no había mecanismos de integración amplios ni entre actores de distinta procedencia social ni en el propio mundo popular, lo que crea bajos niveles de confianza interpersonal. Esta circunstancia no era un problema para el gobierno. Fortalece también el orden impuesto, ya que al cuestionamiento al que como hemos visto estaban sometidos antiguos estilos de asociarse, se agrega que no hay oportunidades relevantes para establecer otros nuevos.

El gobierno consigue establecer, además, una legitimación por resultados que va por diversas direcciones. Realiza una reforma del Estado limitada a sectores clave de la administración como el Ministerio de Economía y

Finanzas y el Banco Central de Reservas, instituciones autónomas vinculadas a la regulación financiera, la administración tributaria, la ejecución de determinadas políticas sociales y la supervisión de empresas privatizadas (Wise 2003).

En esta línea, y desde que la opción neoliberal aparecía como la única disponible, el gobierno deja de entender la política como un espacio de articulación entre Estado y sociedad. Crea, más bien, un circuito restringido, de activa interacción, de los técnicos comprometidos con esa alternativa al ejecutivo, del ejecutivo a los técnicos; estos profesionales eran poco sensibles a las formalidades del Estado de Derecho, a las que consideraban mero ritualismo. Y, en ese mismo movimiento de legitimación por resultados, el gobierno consigue en buena medida desviar el interés de los ciudadanos sobre responsabilidades sociales del Estado que, hasta entonces, habían sido seguidas con atención—como salud y educación—para centrarlas en obras de infraestructura en comunidades alejadas y ayuda alimentaria. Es probable que, en el imaginario de las élites que apoyaban al gobierno, como argumento, y aun más allá de toda razón, había un empeinado intento de reemplazar tanto en políticas como en valores lo que para ellos constituía el traumático legado velasquista.

Los distritos más postergados dispusieron de mayores recursos. Trabajando con grupos en pobreza y pobreza extrema, el gobierno aumentaba su influencia social. Actuaba con quienes tenían niveles de expectativas relativamente bajas. Creaba una situación estable de modo que no se alentarán perspectivas de mayores cambios y mantenía una congruencia entre lo ofrecido y lo cumplido. No hubiera podido alcanzar esta situación estable con la misma eficacia si se hubieran seguido políticas de mayor alcance redistributivo, más riesgosas, difíciles de prever en sus alcances, además de llevar a la sociedad a ser más cuestionadora y dispuesta a la movilización.

La orientación seguida le permitía, en buena parte, prescindir de intermediarios políticos a los que el gobernante tuviera que retribuir su confianza, sino que los operadores elegidos estuvieron por un prolongado periodo atados a su liderazgo plebiscitario. Otra vez, se sacaba partido de una sociedad segmentada que el propio sistema había contribuido en parte a establecer. Poco tiene que ver entonces con una intervención neopopulista, como algunos autores han interpretado este proceso. No hay, salvo en los periodos finales del gobierno, una invocación al pueblo como unidad, intentos de in-

corporación social de nuevos actores o búsqueda de movilizarlos en su apoyo, sino apenas un clientelismo efectivo y de baja intensidad.

Estos años promueven también la formación de identidades en que la realización personal ya no transcurre de modo predominante a través del trabajo sino que se la piensa asociada al consumo. Realización efectiva en algunos casos. O gratificación que se va postergando y sigue siendo un referente en cada momento en que se difiere. Modo de vida al que no se puede llegar, pero que se va integrando a la imaginación de las personas a través de la creciente influencia de los medios que, como vamos a ver, combinan pulsiones que vienen del exterior con la recreación al interior de la propia cultura popular. Hay una renovación de aspiraciones, inquietudes, fantasías que cambian la vida cotidiana de los barrios populares de Lima y de las principales ciudades de provincia.

Finalmente, la ausencia, la debilidad o la inconsistencia de proyectos que discurrieran por caminos alternativos a los que el gobierno consiguió imponer en lo político y cultural “naturaliza” las distancias sociales. Las barreras se saben infranqueables y la protesta social es, en buena parte, desplazada por la privatización de la violencia, lo que da nuevas expresiones a un rasgo persistente de la sociedad peruana. Es el tiempo de los barrios con rejas, del auge de los vigilantes privados, de nuevas versiones de las “clases peligrosas” expresadas en pandillas y barras “bravas”, secuestros y justicia ejercida por cuenta propia en las zonas populares.

ESTRATEGIA DE CORRUPCIÓN, USO DE LOS MEDIOS Y DOMINACIÓN SECULAR

Debe hacerse notar también que Fujimori pudo afirmar su propuesta por la forma en que manejó la corrupción, el uso que hiciera de los medios de comunicación y una dominación más secularizada que la de órdenes anteriores. El gobierno en sus vínculos con los sectores populares no recurrió predominantemente a actos corruptos, salvo en su etapa final —en que compraba o chantajeaba a congresistas y a dirigentes de organizaciones sociales—. Las prácticas inescrupulosas se situaban en otro plano: las negociaciones internacionales desde la compra de armas a la de medicinas; las privatizaciones que le daban protagonismo a ministros y funcionarios para tomar decisiones y a los expertos que tenían información privilegiada y que vendían estos conocimientos restringidos al mejor postor; el chantaje y la compra

de medios y de algunos políticos de los que interesaba conseguir su adhesión; e irregularidades en el manejo de préstamos o donaciones de organismos internacionales o en los criterios de compra o de inversión utilizados por algunas instituciones públicas. En esa línea, Fujimori coincide con los estilos de corrupción prevalecientes en los gobiernos que proclamaban la supuesta transparencia de la economía de mercado, como Menen en Argentina, Pinochet en Chile y Salinas de Gortari en México, en un proceso todavía mal estudiado. En todo caso, el grupo cercano a Fujimori tiene como rasgo distintivo hacer maniobras más expuestas y arriesgadas. Estos recurrentes actos delictivos llegaron hasta el involucramiento deliberado de oficiales de las Fuerzas Armadas para ganar su adhesión, para cortar desde el inicio cualquier expresión de disidencia.

Los dirigentes sociales que siguieron esta propuesta autoritaria estuvieron por lo general al margen de su proceso, lo que produce sensaciones de desconcierto ante el develamiento de los hechos. Explica también la situación existente en que muchos de los rasgos autoritarios impuestos por el gobierno en distintos planos no hayan podido ser desterrados en opiniones y sentimientos de un considerable grupo de ciudadanos. Aun parte de quienes se han apartado definitivamente del fujimorismo siguen ensimismados en el clima intelectual y social de la época a la que comparan con sus desalientos presentes, justificados o surgidos a partir de una idealización del periodo anterior del que no saben o no quieren desprenderse.

A los programas de televisión abierta y a los titulares y contenidos de la prensa popular, el gobierno los utilizó como parte sustantiva de su intención de perpetuarse en el poder, aun antes de practicar una manipulación directa y explícita.

Junto a los mecanismos de identificación y proyección de las telenovelas —que formaban parte de la cultura popular desde hacía varias décadas— los programas cómicos, las parodias, las informaciones de lo que ocurría con la farándula local, los *talk-shows* expresaban una conflictiva vida cotidiana entre los más pobres. Era un correlato de los niveles de desconfianza existentes de la que tímidamente informaban las encuestas de opinión, y que daban cuenta de la intolerancia, el racismo, la agresión, la intención de denigrar a quien hubiera obtenido algún nivel de reconocimiento.

La exposición de lo que antes se consideraba privado, esa actitud de estar mirando por el ojo de la cerradura, expresaba una sociabilidad crispada. Es cierto que no corresponde hacer fáciles asociaciones entre cultura cívica

y contenido de los medios, lo que puede expresar rasgos timoratos o prejuiciosos y recurso a explicaciones simplificadoras. Tampoco corresponde imaginar que todo lo ocurrido en el periodo, y que se prolonga en buena parte hasta el presente, surgiera de la sinuosa voluntad del gobernante y de su principal asesor. Hechas estas salvedades, lo cierto es que deliberadamente se buscó la confrontación de pobres contra pobres, un distanciamiento respecto de las élites que le daba a ese grupo en su lejanía márgenes más amplios de impunidad, un sistemático desprestigio de todo lo que fuera oposición política o política misma, un ajustado manejo de las apariciones públicas del presidente que decía la palabra oportuna ante el periodista indicado, una recurrente imagen que sugería que la mayoría de espacios de encuentro eran conflictivos; todo ello, una y otra vez, remitía simbólicamente al personaje que desde el poder arbitraba, intercedía o pronunciaba el juicio definitivo.

El gobierno de Fujimori tampoco expresa una dominación tradicional que se basara en los poderes tutelares de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas. Es cierto que en la primera hubo un vuelco conservador y en la segunda una adhesión de sus principales oficiales, cooptados por el proceso. Sin embargo, daría la impresión de que Fujimori controlaba esos grupos más que acatar sus dictados, que los ciudadanos se acercaron a él mucho más por el peso de su convocatoria personal que desde lo que se decía desde el púlpito o se proclamaba o amenazaba desde los cuarteles. En buena medida fue bastante más secular que otros autoritarismos conservadores, seguidor de una implacable racionalidad que podía desprenderse en buena medida de otros poderes fácticos. Lo que según la coyuntura lo puede hacer a veces más débil; otras quitarle todo principio de contención a sus actos. De un modo avieso también expresaba las desventajas de una modernidad que avanzaba por un lado distinto a ideas de progreso, tolerancia o emancipación.

UNA TRANSICIÓN CON DÉBILES ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES

La caída del gobierno de Fujimori se debe a la presión internacional, las discrepancias al interior del propio régimen, la imposibilidad de manejar los casos de corrupción por lo flagrante de sus pruebas y la movilización social. Esta última expresaba lo poco que quedaba de la sociedad civil organizada, algunos sindicatos, clases medias y populares con tradiciones de pertenencia a una asociación, estudiantes universitarios que ingresaban a la política

sin que pudiera esperarse de ellos un compromiso duradero, intelectuales, profesionales. Este movimiento marcó una ruptura simbólica con el orden anterior, pero no tenía perspectivas de afianzamiento y de continuidad.

El gobierno de transición de Paniagua cumplió, en un corto periodo, la mayor parte de las tareas que le correspondían para establecer bases institucionales orientadas a una consolidación posterior de la democracia, entre ellas, el establecimiento de un sistema para combatir la corrupción, nuevos criterios de desempeño de los sectores del Estado con el propósito de garantizar su transparencia, cambios en las Fuerzas Armadas y los primeros pasos encaminados a su posterior reforma, una política que buscaba que se mantuvieran los equilibrios macroeconómicos y la creación de la Comisión de la Verdad para entender las razones que llevaron a que se desatara una prolongada guerra interna, describir los acontecimientos ocurridos y contemplar la reparación de las víctimas.

Quizás las particularidades de la caída de Fujimori conducen a una transición con pocos referentes en la literatura comparada sobre el tema. Bajo supervisión y a veces tutela internacional, los convocados son partidos debilitados y una sociedad civil con una representación menguada y, en algunos casos, fantasmagórica. Esta anotada debilidad de los partidos no favorece que se promuevan criterios de colaboración entre ellos. La comprobación de lo limitado de las fuerzas de cada organización se acompaña —tanto a modo de compensación y frágil consuelo como parte del análisis para definir una estrategia— de la convicción de que los otros se encontraban en parecidas condiciones de precariedad. Ello incluía también a Toledo, el político de la oposición que había alcanzado la mayor capacidad de convocatoria durante los meses anteriores a la caída del autoritarismo.

Mientras se seguía con la retórica de pactos y acuerdos promovidos por organismos internacionales y ONGs vinculadas a ellos antes y después del gobierno de Toledo —donde se jugaba a la vez con el cumplimiento de rituales, las declaraciones ocasionales de compromiso y los frecuentes abandonos de la mesa de negociación— se desataba de modo cada vez más manifiesto una dinámica centrífuga. Cada una de las organizaciones políticas sigue priorizando la necesidad de conquistar un electorado indeciso, volátil y a quien se suponía en algunos puntos seguidor del discurso fujimorista entendiendo, probablemente con razón, que la derrota política del régimen anterior no era también la de su cultura intolerante. El desprecio a algunas instituciones del Estado de Derecho, entre ellas la justicia, el congreso y los

propios partidos parecía haberse instalado en la imaginación de los ciudadanos. Y la mayoría de las dirigencias políticas daba la impresión de no estar interesada en producir cambios en las orientaciones existentes sino en encauzarlas a su favor.

LA INESTABILIDAD QUE PROSIGUE:

UN POLÍTICO IMPROVISADO Y UN PARTIDO ALUVIONAL

El triunfo de Toledo es el de un político indeciso que intenta conducir un partido aluvional y plantea, en términos extremos, lo que ya era una característica en la década de 1980: el déficit en asegurar a la vez condiciones de gobernabilidad y de representación. El Presidente ejerce un control errático. En sus diversos gabinetes hace que converjan técnicos independientes con personas que provienen del partido de gobierno. Otorga espacio a los ministros para llevar adelante algunas políticas, pero no compromete su apoyo con aquellos a quienes imagina competidores potenciales. Quiere a veces dar la idea de que se trabaja en equipo para luego realizar un intempestivo cierre del presunto diálogo alcanzado. La gestión política corre por cuenta de un entorno paralelo constituida por asesores formales y personas de su confianza que elaboran una suerte de segunda agenda que ocasionalmente irrumpe en un primer plano.

Los representantes del partido de gobierno son elegidos discrecionalmente por la dirección, en algunos casos porque consiguieron fondos para la campaña electoral, lo que lleva al postulante a establecer lazos particularizados con quienes colaboraron con su financiamiento; esta situación conduce con frecuencia al otorgamiento de prebendas y privilegios. La falta de una carrera pública organizada, la debilidad o inexistencia de mecanismos de evaluación y de control, la inestabilidad jurídica de quien ocupa un cargo facilita que estos representantes practiquen un extendido clientelismo esparcido en redes de pequeña escala, en la que quien arma el vínculo es a veces un dirigente menor de la organización política. En el contexto de precariedad de un partido aislado, los congresistas consideran que esta es la única oportunidad de sacar ventajas de un ejercicio de poder que saben circunstancial y provisorio. No imaginan continuidad posible ni comportamientos estables.

Estamos así ante una situación extraña. Un partido debilitado encuentra precisamente en el reconocimiento de esta condición el incentivo para actuar

como si dominara el conjunto de los resortes del poder. Y consigue, con este estilo de actuación, que pierdan crédito el conjunto de las élites políticas y hasta el Estado mismo en su capacidad de crear un ambiente de confianza en las instituciones y entre las personas. Y esta orientación se lleva adelante al mismo tiempo que, como consecuencia de presiones exitosas —secuelas de lo que pudo lograrse con la transición democrática—, resulta posible llegar a obtener datos confiables sobre partidas presupuestales, políticas seguidas y nombramientos realizados. En la lógica establecida se está en algunos casos en condiciones relativamente accesibles para identificar las transgresiones realizadas. Quienes la cometen, sin embargo, no pueden dejar de insistir en incurrir en irregularidades, aun ante el riesgo de que ellas sean finalmente advertidas.

LA PERSISTENTE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y EL MOVIMENTISMO

La debilidad de los partidos crea, además, nuevas tensiones. En teoría, un proceso de descentralización como el que ha comenzado en el Perú en los últimos años debiera asegurar condiciones de gobernabilidad al establecer una red de autoridades encargadas de gestionar y de negociar con los ciudadanos de modo relativamente fluido, evitando que las demandas y los conflictos se precipiten directamente al gobierno central. Permitiría además mayores niveles de apertura del sistema político al extender la trama de representantes y márgenes para que la comunidad disponga de mayor autonomía para decidir sobre los recursos de los que dispone. En una situación que no se presta a una fácil síntesis, lo que sucedía en algunas de las zonas más pobres, débilmente integradas al mercado y con escasa relevancia de las instituciones del Estado, es que se hizo más notoria la ausencia de élites políticas y sociales articuladoras que permitan agrupar intereses y realizar propuestas con extendida capacidad de convocatoria. Y los intermediarios informales que aspiran al protagonismo compiten entre sí y no tienen una base de apoyo social que les permita durar. Irrumpen, adquieren vigencia, cambian sus adhesiones y lealtades, desaparecen.

Esta condición no condujo como podría esperarse, hecha esta descripción, a la inercia o a la pasividad. La pobreza provoca competencias por recursos que la administración le asigna a un distrito postergado aunque estos no sean de consideración si se hace una evaluación aséptica de las finanzas públicas. Se produjo así una exacerbada competencia entre un abiga-

rrado conjunto de movimientos locales que, a veces, representaban los intereses de un caserío o un anexo rural enfrentado a otro de similares problemas y carencias, que dirigentes que alguna vez fueron aliados tuvieran ahora enconadas posturas de confrontación y los vecinos desconfíen de otros vecinos. La fragilidad de los partidos y de la sociedad civil —que se ha hecho notar en un análisis de conjunto como expresión de inoperancia y amenazas de desestabilización futura— se siente también cuando se traslada el problema a los espacios locales en la existencia de frecuentes disputas entre fracciones y el estallido de conflictos en ocasiones violentos, poco vinculados unos a otros y sin interlocutores reconocidos que, desde el poder, sean capaces de negociar y llegar a acuerdos duraderos.

En una transición donde no existe una recuperación significativa de partidos políticos tradicionales o de otros que consigan afianzarse en el nuevo periodo, a lo que se agrega la débil penetración institucional del Estado o la falta de articulación horizontal o vertical de sus agencias, se ingresa en un escenario movimientista en que irrumpen diversas expresiones de protesta social que no encuentran canales para que se les reconozcan las demandas que interponen. Con frecuencia, en especial si se trata de reivindicaciones regionales y locales, la misma población involucrada va tomando soluciones de hecho que anteceden a la negociación. El diálogo con las autoridades no es así una etapa ordenada en una secuencia regular sino un último recurso una vez que se ha impuesto un punto de quiebre cuando la movilización parece desbordarse. Se juega en el límite respecto del acatamiento del orden formal. Hay etapas que tratan de saltarse y otras que se desconocen, autoridades que jurídicamente estarían obligadas a intervenir —alcaldes, un presidente regional, un ministro, un representante de una corporación minera o industrial— que son dejadas de lado, mientras otras actúan con atribuciones imprecisamente definidas, a modo de improvisados comités de emergencia, que se encargan de mediar o hasta de dar las soluciones provisionales o definitivas.

Los conflictos entre élites o su propia debilidad crean oportunidades para nuevos movimientos sociales especialmente regionales y locales. En el proceso, además, los dirigentes que promueven la protesta quieren ganar protagonismo político en una suerte de escenario vacío en donde no consiguen definirse procedimientos y rutinas en la acción colectiva. En algunas ocasiones, estos dirigentes más que liderar un proceso son utilizados por la población. Esta última les confiere protagonismo en coyunturas críticas.

Los abandonan después, cuando estos confiados conductores de una protesta pretenden ingresar en una competencia electoral o fortalecer orgánicamente el frente o la federación, para tener vigencia de modo sostenido y no pasar por etapas de auge en una coyuntura crítica y de repliegue cuando ese momento pasa. En las reglas de juego establecidas, la autoridad formal es desconocida al mismo tiempo que se mira a la distancia a aquellos que pretender ser líderes alternativos.

NUEVOS ESPACIOS DE UBICACIÓN Y DE PERTENENCIA DE LAS PERSONAS

Las identidades personales y sociales parecen estar viviendo otra etapa más entre algunas experiencias de modernidad que no terminan de concretarse y otras que se van diluyendo cuando apenas se habían esbozado horizontes de cambio. Pareciera que se yuxtapusieran los tiempos, que muchas de las personas tuvieran una cierta noción de que este hecho efectivamente está ocurriendo y convivieran redefiniciones más o menos bruscas y radicales, junto a ensayos e improvisaciones sin un derrotero establecido.

En estos cambios recientes existe una nueva afirmación de las identidades étnicas tanto estableciendo límites como, sin que contradiga lo anterior, pensando creativamente desde su posición las relaciones con los otros. Estas definiciones identitarias son ahora tomadas por nuevos grupos de procedencia popular y ya no es expresión de un aislamiento discriminatorio impuesto por las élites. Las formulan quienes, inmersos en transformaciones que no controlan, quieren establecer una base mínima de seguridad. En este caso, el rescate de la tradición se asocia a un discurso moderno que cuestiona el racismo y reconoce, a la vez, diferencias y vínculos. Estas personas, en parte influidas también por la pérdida de vigencia de otros discursos radicales, encuentran en la recuperación de la historia de sus pueblos razones para una resistencia que responde a una mejor comprensión de lo que les ha ocurrido a los más postergados. No se trata, sin embargo, de una apropiación histórica que busque solamente un inmediato uso instrumental. Está asociada a una compleja elaboración que trata de articular la resistencia política y cultural acogiendo episodios de la vida de sus pueblos, movilizaciones, canciones, expresiones de religiosidad que desde un largo tiempo cuestionaban, y en ocasiones hasta fueron horadando, el discurso oficial de las élites dominantes.

Finalmente, recoger estas identidades se vincula también al creciente flujo de ideas, de redes de comunicación y de personas que plantean la tensión entre lo que está ocurriendo en todas partes y lo que caracteriza y diferencia a la propia cultura. Es un proceso que no se presta a desenlaces simplistas y afortunados. Transcurre entre fusiones conseguidas y celebradas, encuentros no buscados y el rescate de aquello que define un sentimiento de pertenencia menos expuesto a este tráfago de gustos, valores, estéticas, estilos de vida en la que los sujetos pugnan por no perderse en la indiferenciación.

En ocasiones, asumir una identidad étnica puede ser también un recurso utilizado en una negociación. Ocurre, sin embargo, que el paso de la noción de recurso a la idea de asumir identidades es más fluido de lo que parece, cuando se están viviendo periodos donde las personas y los grupos no consiguen discernir donde al fin de cuentas se encuentran ubicados.

Las identidades étnicas pueden prestarse también a atrincheramientos fundamentalistas. El desenlace depende de que las personas y grupos reconozcan diversas líneas de encuentro y escisión —sociales, políticas, de género, culturales— que no lleven a un orden cerrado que se pretenda definitivo. Se trata de una agenda pendiente en el Perú de estos días.

Las migraciones establecen también nuevas experiencias de identidad por los acontecimientos vividos o los conocidos a través de otros, acontecimientos que van definiendo el alcance de lo que puede esperarse. Otra vez se está sin un punto fijo donde situar las expectativas personales y ello se va a expresar en apertura a la innovación y el cambio como en nuevos temores.

Appadurai (2001) señala que hay diásporas del terror, diásporas de la esperanza y diásporas de la desesperación. El Perú en dos décadas ha pasado por todas ellas a la vez y algunas se entremezclan o se suceden en la vida de una persona. Existen las poblaciones desplazadas por la guerra y los problemas que tienen que afrontar tanto quienes volvieron a sus lugares de origen como, en el otro extremo, los que ya no pueden pensar o imaginar en un retorno. Otros, apoyándose en redes familiares trabajosamente establecidas, dentro y fuera del país, encuentran oportunidades para insertarse en una sociedad que tratan de entender sin necesariamente perder su sensación de pertenencia y, a veces, su compromiso con el barrio o la comunidad de donde partieron.

Mientras se van extendiendo en todas las ciudades de país las casas de cambio y las cabinas de Internet, que indican una actividad económica que pasa a tener una creciente dependencia de las remesas que provienen del exterior así como el intento de mantener vínculos en un escenario que ya ha traspasado la comunidad y la frontera. Hay otros, finalmente, que van perdiendo referencias del sitio donde partieron y se sienten marginados, a veces perseguidos en el lugar donde se aventuraron a vivir. Así como, marcando su distancia, van surgiendo élites transnacionalizadas con códigos compartidos que han desistido en muchos casos del compromiso de construir una comunidad política en su país y de la idea de compartir proyectos y aspiraciones con quienes tienen una marcada distancia social. En los cambiantes escenarios contemporáneos siguen sin encontrarse los grupos de poder y la mayoría de la sociedad.

OBSERVACIONES FINALES: PROMESAS, ESPERANZAS Y DERROTAS

Como se ha visto, el Perú en cuatro décadas asistió a un proceso de cambios radicales que poco tienen que ver con un acceso relativamente ordenado a la modernidad. No es este un rasgo particular. En la mayoría de las sociedades, este tránsito se ha desarrollado en medio de resistencias, desconfianzas, lealtades o seguimientos forzados de la población, remoción de antiguas creencias y avances de la racionalización en sus innovaciones institucionales. Lo conseguido en aquellos casos no es poco: el acceso a la justicia, un imperio de la ley más o menos extendido, la noción de igualdad de derechos, la idea de las garantías personales ante los desbordes de la autoridad, la apertura de oportunidades para cambio personales, sociales y políticos, algunas reglas que hacen previsible la relación entre las personas y que una vez que las hacen suyas se convierten en lo que Tocqueville llamaba “hábitos del corazón”. No se llega, en la mayoría de estas experiencias, a construir una sociedad igualitaria, pero el tema se pone en cuestión, se coloca en el debate público y lo renueva.

No ha ocurrido lo mismo en el Perú aunque por allí estuvieran las preocupaciones de políticos, intelectuales, sectores populares, clases medias, las expusieran abiertamente en la década de 1960 —por los años en que se fundara el IEP— y, en el plano social y político, lo intentará hacer el gobierno militar con sus logros, riegos y limitaciones. Los cambios fueron acelerados en la economía, la educación, las formas de tenencia de la tierra,

la trama institucional. Una vasta movilización social antecede y explica en parte este proceso.

De una u otra manera, las mayorías fueron desplazadas del sitio en donde se encontraban, a veces en lo que tienen que ver con sus referencias y seguridades, otras más literalmente en los cambios de ubicación provocados por las migraciones. Paradójicamente, un gobierno que tenía rasgos corporativos cuando trataba de delimitar responsabilidades y estilos de representación es desbordado porque cada grupo traspasa lo que se le quiere imponer, yendo más lejos o tratando de obstaculizar lo que se le propone desde el poder que, sujeto él mismo a este proceso de cambios, se deja llevar en ocasiones por esta misma dinámica de decisiones erráticas o improvisadas.

Poco tiene que ver lo ocurrido con la llamada modernización tradicional —término que ha tenido particular fortuna para interpretar lo ocurrido en periodos anteriores en la sociedad peruana—, en donde las elites se apoderaban de los signos exteriores de los cambios, desde la discusión de constituciones liberales a la apropiación de objetos de consumo, sin que hubiera también una remoción de estructuras e instituciones y en las relaciones personales prevalecientes. Estas características se perdieron definitivamente en la década del setenta. Ya no podía quedar —salvo en las cada vez más cuestionadas discriminaciones étnicas ejercidas contra quienes se encontraban subordinados en la sociedad— ni siquiera la imaginación de un orden estamental.

La formación de identidades modernas va abriéndose paso para llegar a ser una experiencia cada vez más generalizada en la medida en que se van creando mayores espacios para la innovación personal, para reivindicar derechos frente a los gobiernos o los empleadores, para pensar en el Estado y en el mercado, cómo ellos influyen en las biografías personales, qué exigirles, cómo subordinan, de qué manera buscar en ellos oportunidades, lo que supone nuevas objetivos, compartidos por la mayoría, de articulación política y social.

Años después, este proceso de cambios parece perder esta dirección. Estas identidades pudieron tener referentes más ordenados en términos de construcción de asideros políticos e institucionales en la década de 1980, los años de la democracia. Sin embargo, entre la violencia política y la crisis económica las mencionadas identidades se desestabilizaron, perdieron sus sitios de enunciación que ya de por sí eran provisorios, se descolocaron

nuevamente, esta vez sin un aparente derrotero. Los esfuerzos asociativos que parecieron por un tiempo dar la idea de una sociedad civil relativamente vigente y estructurada se desbaratan en su proyecto emancipador de darle nuevos sentido a la participación de las personas en la vida institucional.

Otra vez se vuelve a las lealtades de pequeño grupo que ya no pueden basarse en relaciones estrictamente familiares, institución que también se va desestructurando por los propios cambios culturales del periodo y, en otro plano, por los patrones de crecimiento demográfico.

Hasta que finalmente ocurre que buena parte de la modernidad como proyecto compartido entra en cuestión. La violencia política mostraba que permanecían núcleos duros de exclusión. Otros sectores que iban siendo progresivamente incorporados perdieron definitivamente su capacidad de integración a un sistema —si se le puede llamar tal— que ya estaba dejando de operar eficazmente en lo político, lo social, lo cultural. Hubo quienes fueron desplazados de los sitios en los que imaginaron alguna vez obtener pautas de estabilidad y tampoco pueden volver a la situación de la que partieron. Estos acontecimientos explicarán tanto nuevos intentos de migrar, esta vez predominantemente al exterior, el seguimiento de una propuesta autoritaria, la violencia cotidiana, nuevas expresiones de segregación urbana. Curiosamente se sigue hablando de un país oficial y un país real como discurso de las elites —cuando tratan de comprender lo que estaba ocurriendo— sin entender los nuevos límites que separan uno a otro, como si no se hubiera tenido una historia de cambios, reacomodamientos y fracasos. El mismo sector informal que se toma como expresión de este proceso tiene a su interior parecidas diferencias que articulan a veces, separan en la mayoría de los casos, a unos de otros.

Este errático proceso de modernidad trae algunos cambios en relación a los excluidos. Se entiende que hay desigualdades que no debieran aceptarse. Las políticas sociales darán un giro en la que se pasa de la pobreza consentida a la pobreza administrada que, al fin de cuentas, es también otra modalidad de activo consentimiento.

Como transcurrieron los acontecimientos no existieron las condiciones para crear una noción fuertemente establecida de ciudadanía política. El orden político no fue impregnado de una noción contractualista de obligación y voluntad participante que fuera inclusiva para el conjunto de la sociedad. La noción de titulares de derechos para los más pobres se asoció más a una reivindicación que surgía de la comprobación de una injusticia o, en otro

plano, del reconocimiento de su calidad de personas. Mucho después o mucho antes, entonces, de lo que define una idea secular de ciudadanía. Le faltó a ella una noción de garantías. O es que se terminaba considerando que esas garantías solamente funcionaban o tenían sentido para los privilegiados dejando las reivindicaciones para la mayoría. Como si esta misma ciudadanía que se pretendía defender en tanto mención que concerniera a todos fuera a su vez dicotómica desde su origen, universal y particularizada, no como resultado de una tensión creadora, sino como consecuencia de un orden clasificatorio.

Por ello, los excluidos solamente parecen ser ciudadanos cuando reclaman o se los va reconociendo en un discurso letrado en que se da testimonio del despliegue de sus subjetividades. No lo son, en cambio, ni como demandantes a quienes se les imparta justicia, se les brinde información, elijan las autoridades de un partido político, sean eventualmente contribuyentes. En fin, se los acepta en tanto forman parte de una comunidad indiferenciada o se lo toma como un sujeto desguarnecido al que se le debe impartir una pedagogía presuntamente liberadora. En cierto sentido, todavía siguen gravitando los discursos conservadores de rasgos discriminadores, los radicales poco sensibles a atender los temas de la autonomía personal, los tutelares de las distintas vertientes del catolicismo. Por ninguna de estas prédicas, ser ciudadanos es ante todo un acto que define el lazo político. Los otros aparecen nuevamente como los extraños.

Se han señalado los problemas de representación y gobernabilidad de la sociedad peruana de estos días. Señalamos la singular conjunción de que los partidos de integración de masas llegaron a su apogeo en el mismo momento en que entraban en crisis, y no solo en el Perú, sus proyectos de cambio, sus modelos de sociedad y, con ellos, sus perspectivas de democratización. Al mismo tiempo, no existieron los largos años de aprendizaje institucional que tuvieron algunos países incluso en América Latina para que las organizaciones políticas se sintieran como parte de un mismo sistema, definieran de modo estable el alcance de sus acuerdos y discrepancias, entendieran sus márgenes de disputa. La volatilidad en las opciones fue un rasgo del sistema en las últimas décadas que, en cierto sentido, fue sosegado en parte por el liderazgo que reclamaba ponerse al frente de una situación excepcional por medio de una decisión autoritaria.

En el proceso se fueron diluyendo también las perspectivas de afirmación de una democracia elitista en la que los líderes regularan las ofertas po-

líticas de modo que ellas fueran aceptadas sin cuestionamientos, pasivamente, por el electorado. La contrapartida no es una extendida democratización social. Lo que en cambio se encuentra en el Perú de estos días, salvo excepciones, es la irrupción de liderazgos aluvionales, por fuera del sistema, entrada y salida de organizaciones que adquieren vigencia y la pierden rápidamente después, compromisos circunstanciales entre un representante y el grupo en el que fue elegido. Los lazos de estos partidos con la sociedad son débiles.

Históricamente se ha señalado que uno de los problemas de la construcción de una sociedad democrática es el peso de los caudillos regionales o de los que influyen en pequeños grupos. Quizás siendo esta una dificultad a hacer notar puede resultar más grave aún que quienes ocupan cargos en el congreso o como autoridades locales hayan actuado como reclutadores de votos que apoyaron su campaña contando con el auxilio de pequeños círculos de confianza y siguiendo a una candidato nacional del que este eventual postulante exitoso procurará sacar partido por un efecto de arrastre. Ocurre entonces que pierden en poco tiempo los lazos con los ciudadanos que votaron por ellos. Esta condición genera circuitos de inestabilidad que van desde la extensión de los pedidos de revocatoria a desbordes y manifestaciones de protesta, los que generalmente estallan directamente en el centro mismo del gobierno ante la falta de interlocutores válidos y reconocidos.

Se sabe que ya pasó el tiempo en que un partido tenía que definirse con un cerrado proyecto ideológico lo que, entre otros problemas, no guardaba correspondencia con sociedades cada vez más complejas, plurales y segmentadas. En cambio, si se va en la dirección radicalmente opuesta, la política ya solamente dependerá de la aceptación, más o menos firme, más o menos condicionada según los casos, de quien es el líder de una organización, lo que traba las posibilidades de renovación interna y diluye las razones para justificar una cultura de rendición de cuentas en la que se sienten interesados un grupo significativo de ciudadanos y no un reducido entorno de especialistas.

En el proceso se pierde también la idea del intermediario político con el que se vinculaban con comunidades relativamente estructuradas y que ayudaba a formular y transmitir opiniones con perspectivas reales de llegar a las autoridades que tomaban las decisiones. En la actualidad, estos operadores migran aceleradamente de una posición a otra, cambian su discurso según el interlocutor. El problema no es tanto que no consigan establecer

lealtades con un político o un funcionario sino que, además, pueden perder los lazos de lealtad con la comunidad con cuya confianza decían contar. En este escenario de dispersión todos terminan improvisando: este intermediario que imaginaba controlar el juego, una población dispersa que no sabe a que atenerse, el Estado y el gobierno que no tienen personas o instituciones capaces de identificar lo que está ocurriendo en sociedad para intentar una estrategia que aspire a tener algún grado de articulación e incidencia.

Las personas están situadas en el dilema de saber hasta qué punto las situaciones políticas influyen en sus vidas y a prescindir de interesarse en ellas sabiendo lo poco que pueden influir en sus decisiones y hasta algunos, probablemente, sabiendo los escasos márgenes de maniobra que tiene el gobierno en el escenario internacional como para lograr cambios en la propia sociedad. El descentramiento respecto a los asuntos públicos en estas condiciones expresa más que apatía por el peso de otras preocupaciones, un distanciamiento vivido con hostilidad, irrupciones de protestas que no se articulan unas con las otras, desbordes y transgresiones como parte de una negociación. La política adquiere así rasgos movimientistas donde no encuentran definitivamente un sitio estable ni las autoridades ni los que dirigen la protesta.

Estos acontecimientos son parte también de un proceso que está ocurriendo en los países andinos en que se ponen en cuestión los antiguos alineamientos políticos sin que puedan definirse alternativas con perspectivas o previsiones razonables de afianzamiento. Y tienen también que ver con un clima cultural que opone la idea de pueblo y la nación en tanto instancias reguladas por la intervención política para sustituirlos por la idea de multitud.⁶ Estos grupos ya no tienen espacios y residencias delimitadas, encuentran en el desarraigo y la movilidad su condición de resistencia y rechazan todo principio de unidad política o de mediaciones reconocidas. Son nuevos desafíos para el orden político que trastocan las maneras tradicionales de entenderlo y que, probablemente, al tratar de hacer de la desorganización de los oprimidos una fuerza para resistir nuevas formas de dominación y de resistencia, cuestionan nuestra modernidad, ya que en la celebración del activismo sin construcción institucional no hay espacio para cambios durade-

6. Los alcances de este concepto han sido expuestos, entre otros, por Negri (2000); por Hart y Negri (2002); y en diversos artículos sobre la obra de Paolo Virno en *Revista de Crítica Cultural* 24, junio de 2002, Santiago de Chile.

ros, reconocimiento de las disidencias, innovaciones en la representación porque este concepto mismo de representación es desconocido.

En todo caso, una de las duras enseñanzas de la violencia política es que existieron decenas de miles de mujeres y hombres quechuahablantes, víctimas y protagonistas de los años de la guerra, cuyas muertes la sociedad no pudo siquiera contabilizar sino a través de cálculos estadísticos y cuyos nombres nos son, en su mayor parte, desconocidos.

La lección siniestra y esclarecedora es que, desde los que estaban en los márgenes —“la parte de ninguna parte” como señala Rancière—, desde los desconocidos por las élites, es, precisamente, desde donde puede comenzarse para hablar en estos días de la sociedad peruana en su conjunto.⁷ Desestabilizan las convenciones de interpretación, obligan otra vez a pensar el país, el alcance de sus cambios, la importancia de recuperar la historia para obligarse a pensar mejores alternativas que las que hasta ahora se presentan. Solamente queda la esperanza de que la mayoría de los protagonistas no se limiten a hacer cálculos de corto plazo y comprendan la importancia del tema de la inclusión y de la sensibilidad abierta a las diferencias, del pluralismo político y el pluralismo cultural y la justicia aceptada por razones de principio, o hasta si se quiere, por razones de gobernabilidad. Esta es la única forma de escaparse del peso que todavía tiene una sociedad tradicional y una modernidad frustrada entre un proyecto que no termina de definirse y algunas expresiones de su derrota.

BIBLIOGRAFÍA

- APPADURAI, Arjun
2001 *La modernidad desbordada*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- BOURRICAUD, François
1969 “Notas sobre la oligarquía peruana”. En: *Tres ensayos y una polémica: la oligarquía en el Perú*. Lima: IEP.

7. Una exposición amplia de la propuesta de Rancière se encuentra en Zizek (2002).

- CORNEJO POLAR, Antonio
1994 *Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas*. Lima: Editorial Horizonte.
- COTLER, Julio
1994 "La mecánica de la dominación interna y del cambio social". En: Cotler, Julio, *Política y sociedad en el Perú, cambios y continuidades*. Lima IEP.
- CVR
2003 *Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – Perú*. Tomo I. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación.
- DE TRAZEGNIES, Fernando
1980 *La idea del derecho en el Perú republicano del siglo XIX*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- EAGLETON, Ferry
2000 *The Idea of Culture*. Londres: Blackwell.
- FORMENT, Carlos A.
2003 *Democracy in Latin America 1760-1900*. Chicago: The University of Chicago Press.
- HART, Michael y Antonio NEGRI
2002 *Imperio*. Buenos Aires: Paidós.
- LACLAU, Ernesto
1997 "Deconstrucción, pragmatismo y hegemonía". En: *Agora*, año 3, N.º 8. Buenos Aires.
- LÓPEZ, Sinesio
1997 *Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: IDS.
- MAINWARING, Scott y Thomas R. SCULLY
1995 "Introduction". En: Mainwaring, Scott y Thomas R. Scully (eds.), *Building Democratic Institutions, Party Systems in Latin America*. Stanford University Press.

- MANIN, Bernard
1998 *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza Editorial.
- MATOS MAR, José
1984 *Desborde popular y crisis del Estado: el nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima: IEP.
- NEGRI, Antonio
2000 *Spinoza subversivo: variaciones in-actuales*. Madrid: Editorial Akal.
- NOVARO, Marcos
2000 *Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
- SERRANO, Enrique
1999 "Modernidad y sociedad civil". En: Alberto Olvera (coordinador). *La sociedad civil de la teoría a la realidad*. México D.F.: El Colegio de México.
- TANAKA, Martín
1998 *Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú*. Lima: IEP.
- TORCAL, Mariano, Richard GUNTHER y José Ramón MONTERO
2002 "Anti-Party Sentiments in Southern Europe". En: Gunther, Richard, José Ramón Montero y Juna J. Linz (eds.). *Political Parties*. Oxford: Oxford University Press.
- VICH, Víctor
2002 *El caníbal es el otro: violencia y cultura en el Perú contemporáneo*. Lima: IEP.
- WISE, Carol
2003 *Reinventando el Estado: estrategia económica y cambio institucional en el Perú*. Lima: Universidad del Pacífico.
- ZIZEK, Slavoj
2002 *El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política*. Buenos Aires: Paidós.